

AMÉRICA LATINA

Elecciones marcaron el paso 2
Lenta recuperación 4

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

Remesas tienden a estabilizarse 5
Acuerdo de cumbre no es vinculante 16
Mujeres siguen enfrentando elevado riesgo de contraer VIH/sida 34

ARGENTINA

¿Educación superior manipulada por mineras? 15
Entrevista con Rodolfo Páramo, médico experto en agrotóxicos 27

BOLIVIA

Políticas ambientales se hacen esperar 24
Entrevista con feminista Dunia Mokrani Chávez 35

CHILE

¿Transición consumada? 6
Entre el sismo y el quiebre social 7
Oposición en suelos movidos 9
Notables logros en equidad de género 31

COLOMBIA

Indebida objeción de conciencia 33

COLOMBIA/ECUADOR

Frontera sin Estado 28

COSTA RICA

Abrumadora victoria de Chinchilla 14
Políticas ambientales en retroceso 25

CUBA

Muerte de un disidente 29

ECUADOR

Ecología rompe al gobierno 20
Sarayaku logra salida de petroleras 32

EL SALVADOR

Activistas asesinados 22

GUATEMALA

Hambruna se agudiza 19

HAITÍ

Ayuda llega a cuentagotas 12
En el fútbol, un rayo de esperanza 13

MÉXICO

Al declara a indígenas presas de conciencia 21
Activistas indígenas en riesgo 23

PERÚ

En riesgo la "gestión del riesgo" 18
Polémico informe sobre Bagua 30

VENEZUELA

Acallada voz crítica 11



Sismo y quiebre social

PÁG. 7

Terremoto dejó al descubierto una fractura del tejido social chileno en que se constata la debilidad de la organización popular.

En el fútbol, un rayo de esperanza

Emotiva presencia de equipo de fútbol femenino haitiano sub-17 en campeonato regional.

PÁG. 13





WWW.ALER.ORG

Latinoamericanos acudieron masivamente a las urnas durante el 2009.

AMÉRICA LATINA

Andrés Gaudin desde Buenos Aires, Argentina

Elecciones marcaron el paso

Pese a avances en elecciones democráticas en el 2009, luces de alarma se encendieron con golpe de Estado en Honduras y bases militares en Colombia.

Después de décadas en que las dictaduras militares se habían llevado por delante todos los usos y costumbres democráticos, en el 2009 América Latina parece haberse tomado la revancha. Si se considera que el voto es el precepto insignia de la institucionalidad, las 12 visitas a las urnas en el 2009 marcan un récord que lo hacen el año “más democrático” del último cuarto de siglo. Sin embargo, no faltan las luces de alarma.

La ronda comenzó el 25 de enero, con un referendo en Bolivia, y se cerró el 13 de diciembre en Chile, con la primera vuelta de la presidencial. En el medio hubo 10 viajes a las urnas donde se vio de todo, desde la ratificación abrumadora de los gobiernos populares de Sudamérica (Bolivia, Ecuador y Uruguay)

hasta el renacer del Partido Revolucionario Institucional (PRI)—que gobernó México durante 70 años hasta el 2000— en las legislativas de julio, donde tras 12 años de derrotas le arrebató la primacía al derechista Partido Acción Nacional.

El año había comenzado con buen signo, después de que el recién electo presidente de EEUU, Barack Obama, quien juramentó el 20 de enero, asegurara que se proponía instaurar una relación respetuosa con América Latina —sistemáticamente vilipendiada durante los gobiernos de George W. Bush (2001-2009)—, un vuelco que incluía el respeto al principio de no intervención y un cambio radical en la relación con Cuba.

Pero Obama terminó mirando para otro lado cuando las fuerzas retrógradas de Honduras derrocaron al presidente constitucional, o cuando mantuvo inalterado el bloqueo comercial sobre Cuba, o cuando apenas liberó a 12 de más de 300 prisioneros de la base de Guantánamo cuando había prometido el cierre de ese campo de concentración radicado en un territorio usurpado a Cuba.

Ola progresista

En El Salvador, la izquierda aglutinada alrededor del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desplazó a la ultraderechista Alianza Revolucionaria Nacionalista (ARENA), en el gobierno durante 20 años, y puso en la presidencia desde el 1 de junio al periodista Mauricio Funes.

El Salvador se sumó así a los gobiernos que fueron elegidos por el voto del rechazo al neoliberalismo que han proliferado en la región desde 1998 con la elección de Hugo Chávez en Venezuela. Le siguieron a Venezuela los gobiernos de Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay.

“Lo que unifica a estos gobiernos, más allá del voto que derrotó a los gobiernos neoliberales, son dos aspectos: la opción por procesos de integración regional —a diferencia de los tratados de libre comercio— y la prioridad asignada a las políticas sociales”, señala el analista brasileño Emir Sader en la revista chilena *Punto Final*.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa fue reelegido con mayoría absoluta en la primera ronda electoral, el 26 de abril.

“Retomaremos nuestro origen: nosotros estamos aquí por los pobres, no es una opción excluyente... , pero lo tenemos claro: nuestra opción preferencial es por los más pobres de este país y nuestro compromiso, erradicar la miseria”, dijo entonces Correa.

El énfasis en la inclusión social y la redistribución de los excedentes de la nacionalización a través de los bonos como la Renta Dignidad, para personas mayores de 60 años, o el Juancito Pinto, destinado a los niños en edad escolar, le dieron a Evo Morales más de 60% de los votos válidos en las elecciones presidenciales de Bolivia el 6 de diciembre, en las que a su vez se aseguró el control de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional.

En ambos países, los pueblos originarios consolidaron su presencia con gobernantes que respaldan sus instituciones comunitarias y sus derechos culturales y sobre la tenencia

de la tierra, que nunca antes les habían sido reconocidos.

El 29 de noviembre Uruguay volvió a votar por el progresismo. El ex guerrillero José Mujica fue elegido presidente, otorgándole un segundo gobierno consecutivo al progresista Frente Amplio.

Péndulo vuelve a la derecha

Si bien en algunos países las tendencias izquierdistas se mantuvieron, no ha sido el caso de Panamá, donde la derecha ganó las elecciones de mayo de la mano del empresario Ricardo Martinelli.

En junio, en Argentina se había recibido la primera señal sobre el auge de la derecha, las grandes corporaciones y quienes aún reivindican las prácticas de la dictadura (1976-83). Liderada y financiada por los productores de soja y con la tutela ideológica de los principales diarios del país, la derecha desarrolló prácticas desestabilizadoras y su objetivo, hoy, es lograr la salida anticipada de la presidenta Cristina Fernández, cuyo mandato constitucional caduca en el 2011.

A fin de año fue Chile el escenario en el que irrumpieron las tendencias conservadoras lideradas por el empresario Sebastián Piñera. El 13 de diciembre, en la primera vuelta de la elección presidencial, la vieja derecha, heredera política del fallecido ex sanguinario dictador Augusto Pinochet (1973-90), apabulló con sus votos a la llamada Concertación Democrática, alianza gobernante desde 1990.

“Llamativamente, la campaña de Piñera enfatizó su acuerdo con lo realizado por la presidenta Michelle Bachelet, incluyendo las políticas orientadas a superar la pobreza”, recordó Guillermo Holzmann, un politólogo de la Universidad de Chile. Sólo con eso y la propuesta de un “cambio de estilo” para lograr “más eficiencia” obtuvo la reconquista del gobierno, a tres años de la muerte de Pinochet.

Tensiones no cesan

Con un repudio interno y externo pocas veces visto y la mirada entre prescindente y cómplice de Obama, la derecha de Honduras volvió a sus vicios y con un golpe de Estado derrocó el 28 de junio a Manuel Zelaya, responsable de un tímido proceso de cambios que, sin embargo, había irritado a los grupos dominantes.

“Honduras fue una exitosa prueba piloto. Las corporaciones económicas, la derecha política y los medios de prensa, con la bendición de la Iglesia Católica, volvieron a escribir una página roja y han patentado una nueva forma de golpe de Estado que nos obliga a permanecer alertas”, opinó el politólogo argentino Atilio Borón.

Al iniciar su mandato Obama había dicho que quería recomponer las relaciones con América Latina. Sin embargo, la crisis de Honduras mostró y probó que Obama no es EEUU y que en EEUU hay factores de poder dispuestos a bombardear sus mejores intenciones.

El 15 de agosto, después de haber recibido al depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reveló algo “increíble e inquietante”, según sus propias palabras: an-

tes de tomar la ruta a Costa Rica el avión en el que los golpistas sacaron al presidente del país “hizo escala en una base militar estadounidense”.

“Si EEUU quisiera acabar con los golpistas lo lograría en cinco segundos”, dijo entonces Zelaya.

En julio, las autoridades colombianas anunciaron que se encontraban negociando un acuerdo con el gobierno de EEUU para el uso compartido de siete bases con tropas estadounidenses, lo cual generó preocupación en varios países de la región.

El acuerdo, que tendría una vigencia de 10 años, es similar al firmado con Ecuador para el uso de la base de Manta, que finalizaba en noviembre de este año y que no fue renovado por las autoridades ecuatorianas. El 11 de julio salió de Manta el último vuelo que puso fin a 10 años de presencia militar estadounidense en suelo ecuatoriano. Desde esa base se realizaron operaciones de interdicción, monitoreo, rastreo y control de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Además, el acuerdo otorga inmunidad al personal militar estadounidense y permite el aterrizaje de aviones C-17 utilizados para transporte de tropas y equipo militar pesado.

Ante los temores de algunos países de que las bases sean utilizadas para atacar blancos fuera de Colombia, el presidente Álvaro Uribe reiteró que “estos acuerdos nunca tienen por objeto agredir a terceros Estados, eso está excluido en el texto, en los acuerdos que lo enmarcan y en la práctica de Colombia. Colombia es un país históricamente agredido por el terrorismo, por el narcotráfico, y en los últimos años ha combatido contra el terrorismo y el narcotráfico, y jamás ha sido un país agresor de la comunidad internacional”.

“Obama sabe que al meter la cola en Colombia puede provocar una violenta crisis. Había prometido una relación basada en el diálogo, pero en Colombia optó por los hechos consumados y negoció a escondidas con un presidente desacreditado [Álvaro Uribe]. Había prometido cerrar la cárcel de Guantánamo y no lo hizo. Reivindica todas las políticas de Bush”, dijo el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein.

Pero no sólo en Colombia se estarían instalando bases militares EEUU. El gobierno de Panamá anunció el 2 de noviembre el inicio de la construcción de cuatro bases navales en la costa del Pacífico para combatir el narcotráfico. El viceministro de Gobierno, Alejandro Garuz, precisó que serán bases netamente panameñas, negando que se trate de instalaciones estadounidenses. La embajadora de EEUU en Panamá, Barbara Stephenson, manifestó el apoyo de su país a la construcción de las bases y precisó que organismos de seguridad estadounidenses contribuirían con el entrenamiento a los agentes panameños.

A pesar de las iniciales buenas intenciones del presidente Obama, los hechos ocurridos en el 2009 no hacen sino demostrar que EEUU todavía tiene injerencia en los asuntos internos de la región. □

“Si EEUU quisiera acabar con los golpistas lo lograría en cinco segundos”.

— Manuel Zelaya

Lenta recuperación

Desempleo podría frenar crecimiento económico.

Se prevé que el impacto de la crisis financiera internacional en América Latina irá amainando en el 2010, pero otros factores —económicos, políticos y climatológicos— podrían retardar la recuperación.

La crisis financiera, aunque no fue tan severa como en otras regiones en desarrollo, tales como Europa Oriental, golpeó duramente a América Latina y el Caribe. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó a principios de enero que el Producto Bruto Interno (PIB) regional cayó en 1.8% en el 2009 luego de casi una década de crecimiento ininterrumpido.

México, el país de la región con la mayor dependencia económica de EEUU, fue el más afectado de los 20 países evaluados por la CEPAL. Su economía se contrajo en 6.7% el año pasado. Bolivia, que podría decirse tiene los menores vínculos económicos con EEUU, registró el mayor crecimiento, 3.5%. Perú, que con frecuencia es puesto como ejemplo de manejo de la crisis por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cayó de 9.8% en el 2008 a una prevista contracción económica de 1% el año pasado.

El mayor obstáculo al crecimiento estuvo en la caída de las exportaciones, provocada principalmente por el desplome de los precios de las materias primas. Venezuela, por ejemplo, experimentó una reducción de 42% de sus exportaciones en el 2009, debido a las masivas fluctuaciones de los precios del petróleo. Ecuador, otra economía dependiente del petróleo, observó una caída de 30% de sus exportaciones. La inversión extranjera directa en la región se redujo en 37%.

Estas tendencias llevaron al incremento del desempleo en 1% en la región, a 8.3%, y al aumento de los niveles de pobreza. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que 3 millones de personas cayeron en la extrema pobreza en América Latina y el Caribe en el 2009, llegando a un total de 71 millones. Otros 110 millones de latinoamericanos son clasificados como pobres.

La única tendencia macroeconómica positiva en la región fue en el área de los precios al

consumidor, que cayeron considerablemente en 4.5% el año pasado, frente a un aumento de 8.3% en el 2008. En el Perú, por ejemplo, la inflación en el 2009 totalizó 0.3%, mucho menos que la inflación de 6.6% el año anterior, la más alta en 12 años.

Organizaciones internacionales como CEPAL e instituciones financieras prevén para el 2010 una inflación baja, mayores exportaciones y recuperación del PIB. La CEPAL coloca el crecimiento regional en 4.1%, con tres países a la cabeza: Brasil, Uruguay y Perú. Se espera que Brasil lidere la recuperación con 5.5% de crecimiento.

“Para 2010, las mejores expectativas de crecimiento y el alza en los precios de algunos productos básicos que la región exporta permitirían un aumento en los ingresos públicos de la región, con la consecuente mejoría del saldo fiscal”, sostiene la CEPAL en el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2009”, dado a conocer el 10 de diciembre.

No hay garantías de recuperación

Sin embargo, los economistas afirman que la recuperación no es un hecho, señalando una serie de factores tales como el desempleo, que podrían atenuar el crecimiento. Hay preocupación en el sentido de que las tasas de pobreza y desempleo no sigan la tendencia del crecimiento.

Germán Alarco, investigador principal de CEN-TRUM, la escuela de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo que muchos países de la región están apostando a una nueva subida de los precios de los recursos naturales. Dijo que esto podría ser un error.

“Concentrarse sólo en recursos naturales crea el riesgo de la ‘enfermedad holandesa’, con una caída de las manufacturas debido al ingreso generado por la producción de minerales y exportaciones. No debemos desalentar la inversión en industrias extractivas, pero no deben ser el único foco de atención”, dijo.

La “enfermedad holandesa” está asociada por lo general con el descubrimiento y la explotación de recursos naturales que ocasionan un gran flujo de capital a un país. El término fue acuñado para explicar el impacto de los ingresos por hidrocarburos sobre la economía de Holanda hace varias décadas. Venezuela es una versión extrema en la región, que eligió importar casi todos sus alimentos, medicinas y otros bienes con su renta petrolera.

Alarco dijo que uno de los principales problemas en un país como Perú es que las industrias extractivas no crean empleos. Un proyecto cuprífero de US\$3 millardos generaría alrededor de 2,000 empleos directos y tal vez hasta 10,000 empleos indirectos, pero la economía necesita crear 300,000 empleos anualmente para



Más de 180 millones de latinoamericanos viven en la pobreza.

WILLIAM CHICO

absorber a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. Se necesitaría añadir decenas de proyectos multimillonarios cada año.

Péndulo electoral

La recuperación de la crisis coincidirá con una nueva ronda de elecciones en la región. La oscilación del péndulo electoral dependerá de cómo los gobiernos hayan manejado la crisis. Gran parte de la atención estará en Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva continúa siendo inmensamente popular y se considera que ha guiado bien al país a través de la crisis, pero actualmente no parece capaz de transferir a su partido este respaldo a su persona. Una situación similar ocurre en Chile, donde la presidenta saliente Michelle Bachelet tiene 80% de popularidad, pero la gobernante Concertación Democrática enfrenta su elección más difícil desde 1990. El candidato de la coalición oficialista, el ex presidente Eduardo Frei (1994-2000), tiene 40% de intención de voto de acuerdo con encuestas realizadas la semana anterior a la segunda vuelta electoral del 17 de enero en que se enfrentará con el conservador Sebastián Piñera, a quien Bachelet derrotó en el 2005.

Otros países a tener en cuenta son México, que llevará a cabo elecciones gubernatoriales, y Perú, que elegirá alcaldes y presidentes regionales en octubre como preludeo a los comicios presidenciales del 2011. El presidente peruano Alan García dijo a principios de enero que su país necesita prepararse para una "crisis electoral" provocada por el ruido político.

También se observarán de cerca las elecciones en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez enfrentará la más importante batalla en las urnas de su carrera. Venezuela no sólo se vio duramente afectada por la crisis financiera y el desplome de los precios del petróleo, sino que también ha tenido que enfrentar una crisis energética provocada por la falta de lluvias. Casi 75% de la energía en Venezuela es producida por un solo complejo hidroeléctrico. Inflación, escasez de algunos productos básicos y apagones no son una buena receta para el éxito electoral.

Un incremento de los precios del petróleo podría ayudar a Chávez, pero el gobierno no quiere cruzarse de brazos y esperar. El 8 de enero el mandatario anunció sorpresivamente la devaluación de la moneda en casi 50% para ayudar a estimular el crecimiento. La CEPAL prevé que Venezuela crecerá en 2% en 2010, mucho menos que las cifras que logró durante casi toda la segunda mitad de la década.

El estado de la economía venezolana también afecta a los países que forman parte de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), proyecto de integración impulsado por Chávez como respuesta a la propuesta de integración planteada por EEUU basada solamente en el comercio. Venezuela fue el principal propulsor del Banco del ALBA y la moneda regional, conocida como sucre, y el que mayores aportes financieros ha venido haciendo a los programas agrícolas, manufactureros y sociales del ALBA en sus nueve países miembros. □

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

Remesas tienden a estabilizarse

Transferencias son fuente indispensable de recursos para familias pobres.

Logo de caer 15% en el 2009, las transferencias de dinero que los migrantes envían a sus familias en sus países de origen tenderán a estabilizarse este año, informó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En un informe divulgado el 4 de marzo, el BID indicó que las remesas en el 2009 alcanzaron US\$58.8 millardos, bastante menos que los \$69.2 millardos del 2008.

"El año pasado marcó la primera vez que las remesas se redujeron en relación al año previo", desde que se comenzaron a analizar esos flujos en el 2000, dijo el BID en un comunicado.

El BID indicó que "hasta el 2009 el crecimiento promedio anual fue de

"El año pasado marcó la primera vez que las remesas se redujeron en relación al año previo".

— BID

17%, aunque comenzó a frenarse en el 2006 y se redujo considerablemente a partir del 2008, cuando la crisis económica mundial afectó los niveles de empleo e ingresos de emigrados en países como EEUU, España y Japón".

A pesar de la caída del año pasado, las remesas continuarán siendo una fuente indispensable de recursos para millones de familias latinoamericanas y caribeñas, ya que les permiten cubrir gastos básicos de alimentación, vivienda, educación y salud. En países como El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua las remesas constituyen más del 10% del producto interno bruto. —Noticias Aliadas.

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Remesas (US\$ millones)

País	2008	2009
México	25,145	21,132
Brasil	7,200	4,746
Colombia	4,842	4,134
Guatemala	4,315	3,912
El Salvador	3,788	3,465
Rep. Dominicana	3,111	2,790
Perú	2,960	2,665
Ecuador	2,822	2,495
Honduras	2,701	2,483
Jamaica	2,033	1,798
Haití	1,870	1,641
Bolivia	1,097	1,023
Nicaragua	1,000	915
Argentina	955	853
Chile	880	756
Venezuela	832	733
Paraguay	700	691
Costa Rica	624	535
Guyana	415	356
Panamá	325	291
Trinidad y Tobago	130	116
Uruguay	130	116
Surinam	120	103
Belice	110	100

Fuente: BID

¿Transición consumada?

Triunfo de coalición
derechista parecería
consolidar transición
democrática, pero subsisten
el debate y algunas zonas
oscuras.

¿Que si ha concluido, por fin, la transición? Es una pregunta muy especiosa”, dice el director de la revista *Punto Final*, Manuel Cabieses, veterano periodista de izquierda, testigo ocular y sentimental de batallas, rupturas y revueltas. “Lo que sí te puedo decir es que la derecha ha vuelto para quedarse”.

A pocos días de que el multimillonario empresario Sebastián Piñera, el candidato que llevó al triunfo a la derechista Coalición por el Cambio, anunciara su nuevo gabinete de 16 hombres y seis mujeres, el debate sobre la transición de la dictadura a la democracia vuelve a planear sobre el ecosistema político chileno, aunque bajo otras coordenadas.

En teoría, el triunfo de Piñera demostraría que el proceso de transición, comenzado en 1990 con la llegada del demócrata cristiano Patricio Aylwin (1990-94) al Palacio de la Moneda, terminó finalmente de consolidarse, pues con el acceso de la derecha —por vía democrática— al poder, llega ahora la alternancia.

Abona a esa tesis el hecho de que, ya en julio del 2005, durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006), fue reformada la Constitución, lo que condujo al propio mandatario a sentenciar que “la transición había concluido”. Fueron 58 reformas importantes, entre las cuales sobresalía la eliminación de los ocho senadores designados (no elegidos por voto popular) que establecía la Carta Magna.

También se redujo el periodo presidencial de seis a cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata. Además, se restituyó al Ejecutivo la facultad de cambiar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, algo que antes pasaba por el filtro del Consejo de Seguridad Nacional, que quedó en calidad de asesor del poder civil.

Cabieses, sin embargo, recuerda algo difícil de objetar: que la Constitución vigente es la de 1980, creada e impuesta por el dictador Augusto Pinochet (1973-90) vía un referendo realizado ese mismo año.

No parece casual, por eso, que durante la reciente campaña electoral aún se escucharan algunas voces en pro de una nueva Carta Magna. Los partidarios izquierdistas del ex presi-

dente demócrata cristiano Eduardo Frei (1994-2000), candidato derrotado de la gobernante Concertación Democrática, la proponían abiertamente, sin que Frei asintiera con claridad. Una militante socialista dijo a *Noticias Aliadas* que “dependería de la correlación de fuerzas”, por lo que se podría decir que no es un tema cerrado. O al menos que es un asunto que flota en algunos imaginarios políticos.

La herencia de la dictadura

Para Tomás Mosciatti, director de la influyente emisora radial Bío Bío, la transición, efectivamente, ha terminado porque Pinochet ha muerto y “porque no hay ministros designados por Piñera que hayan participado en primera línea en la dictadura”. No obstante, admite que la Concertación legitimó el modelo dejado por Pinochet.

Mosciatti afirma que la Concertación, ahora de salida, de alguna manera hizo suya “la institucionalidad jurídica y económica” dejada por el régimen pinochetista y ahora “permite que la derecha, la autora, gobierne legitimada por los votos”. Esa derecha, añade, hoy debe legitimar ese modelo “no desde la dictadura sino desde la democracia”.

La Concertación, ahora de salida, de alguna manera hizo suya “la institucionalidad jurídica y económica” dejada por el régimen pinochetista. — Tomás Mosciatti

En medio de este cruce complejo de pareceres subsiste un rastro concreto, electoral, de los tiempos dictatoriales que es bastante criticado: el sistema binominal para elecciones parlamentarias y municipales. En virtud de éste, en cada circunscripción electoral hay dos plazas vacantes y, por ende, cada agrupación política presenta dos candidatos.

Si la votación por un partido supera por el doble de votos a las listas rivales, dicha agrupación gana las dos representaciones. Pero si no es así, sale elegido el representante más votado de cada coalición, lo que ha llevado a situaciones absurdas, como la victoria de un candidato que sacó menos votos que el segundo de otra lista.

Este sistema, de acuerdo a numerosas opiniones, fue instaurado por Pinochet en su Constitución para impedir el acceso de agrupaciones pequeñas, generalmente de izquierda, y fomentar el bipartidismo que se mantiene vigente en Chile. Un sistema donde la derecha y la centroizquierda dominarían el escenario evitando zonas “extremistas”.

Mosciatti sostiene que lo que ahora le corresponde a la derecha, ya en el poder, es “sostener el sistema de protección desarrollado por [la presidenta saliente] Michelle Bachelet”, además de fomentar la “meritocracia” y “hacer una revolución en la educación”. Otro punto:

resistir la tentación de que los grupos económicos sigan concentrándose cada vez más.

Derechos humanos en el tintero

¿Preocupan todos estos asuntos a Piñera? Muy en su estilo, el presidente electo ha señalado que reconoció, el día de la presentación de sus ministros, que se había “avanzado mucho”, pero que se iniciaba una “segunda transición, la transición joven, la transición del futuro”, que transformaría a Chile en “un país desarrollado y sin pobreza”.

Teniendo en cuenta que en este país, considerado exitoso desde afuera, la pobreza aún alcanza a unos dos millones de personas —de una población total de 16 millones—, la oferta no es desechable.

El problema, sin embargo, y como sugiere en un largo ensayo el analista político Eugenio Tironi, es que el debate sobre la desigualdad social aún está en curso. Se trata, según Tironi, de “un mandamiento ético, no sólo político e ideológico”, que a partir del gobierno de Lagos adquirió cierta fuerza y que no se sabe si

recobrará impulso ahora que la derecha vuelve al poder, por vía democrática, luego de más de 50 años (la última vez que la derecha ganó unos comicios fue en 1958). Eso está por verse con el fuerte componente empresarial del gabinete.

Finalmente, otro tema que parece quedarse en el tintero es el de los derechos humanos. A pesar del nuevo Museo de la Memoria, ya no es algo que defina una elección, aun cuando guarda cierta vigencia. En la campaña, recuerda Mosciatti, Piñera se reunió con militares en retiro y prometió acelerar los juicios de aquellos oficiales procesados por violaciones a los derechos humanos, sin que ardiera la pradera.

La transición chilena, en suma, parece haber avanzado y resuelto algunos dilemas. Lo que quizás no ha logrado aún es pisar fuerte no sólo en el tema político, sino en el social, donde los rastros de desigualdad y las heridas del pasado todavía juegan un papel que sigue pesando y que no ayuda a configurar un país libre de sombras y dolores. □

CHILE

Rocío Alorda desde Santiago

Entre el sismo y el quiebre social

Terremoto dejó al descubierto una fractura del tejido social en que se constata la debilidad de la organización popular.

En menos de tres minutos cayó como castillo de naipes la moderna infraestructura que Chile construyó durante las últimas décadas y que constituyó el reflejo de su “exitoso” modelo de desarrollo. El devastador terremoto del 27 de febrero, sus réplicas y el maremoto arrasaron con poblaciones costeras, hicieron colapsar construcciones antiguas y nuevas, carreteras y puentes, e incluso edificios entregados a sus propietarios hace menos de un año presentaron daños estructurales irreparables.

A la compleja situación que se vive en la capital del país así como en las regiones del sur, se suma un ambiente de caos social producto de la falta de abastecimiento de víveres, la poca organización social y restricción de las comunicaciones, las que lentamente se han ido regularizando a lo largo de la semana.

Concepción, la segunda ciudad más poblada del país, ubicada a 325 km al sur de Santiago, fue una de las más golpeadas por su cercanía con el epicentro. Más de 200,000 personas resultaron afectadas.

Un error de diagnóstico por parte de la Ar-



Terremoto dejó al descubierto la irresponsabilidad de las empresas constructoras, muchas de ellas declaradas en quiebra después del sismo.

mada chilena hizo que las autoridades descartaran en un primer momento la posibilidad de un tsunami. Sin embargo, minutos después del sismo, olas de más de 8 m de altura arrasaron con localidades costeras como Constitución y Dichato. El comandante en jefe de la Armada

chilena, almirante Edmundo González, admitió que hubo responsabilidad de su institución en no alertar oportunamente a la población costera del Maule y Bío-Bío sobre el tsunami. “Fuimos poco claros en la alerta de tsunami y compartimos responsabilidad de muchas muertes”, declaró González a radio Cooperativa.

Sin tener todavía una evaluación precisa de los daños ni claridad sobre la cantidad de víctimas fatales —se habla de 531 fallecidos, de los cuales 279 han sido identificados—, la presidenta saliente Michelle Bachelet declinó inicialmente aceptar la ayuda internacional, actitud que fue duramente criticada. Esta postura tuvo que ser enmendada tras conocerse la devastación que dejaron el terremoto y el maremoto.

El gobierno decretó al día siguiente del sismo “estado de excepción constitucional de catástrofe” por 30 días en la región del Maule y en la provincia de Concepción, indicando que dicha medida busca “garantizar la situación de orden público en las zonas más afectadas por el terremoto y acelerar la distribución y entrega de ayuda”. Así, en dichas localidades se aumentó la dotación militar y se ha intentado controlar el desborde social a través de toques de queda que en el caso de Concepción llega a 16 horas diarias.

Habitantes y autoridades de los poblados más afectados criticaron al gobierno por su lento actuar en las zonas de catástrofe, ya que la gran mayoría del contingente militar ha sido dispuesta para proteger la propiedad privada y no a la ciudadanía.

Remezón económico

El movimiento sísmico que Chile vivió está mostrando un quiebre social que hoy se hace visible —sobre todo a través de los medios de comunicación—, donde la pobreza y las inequidades han generado grupos de personas que no diferencian lo que es necesidad y lo que es pillaje, lo que ha venido a ser llamado terremoto social por los noticieros.

Si bien la pobreza nacional sólo alcanza al 13.7% de la población chilena de aproximadamente 17 millones, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del 2006 (10.5% de pobres y 3.2% de indigentes), en Bío Bío y Araucanía, ubicados en la zona del epicentro del sismo, la pobreza llega a 20.1% y 20.7%, respectivamente. En muchas comunas la pobreza supera el 35% en esta región.

A la destrucción de las casas y edificios se suma el colapso de carreteras y puentes, así como de los servicios de comunicaciones telefónicas, lo cual ha agravado el aislamiento en que se encuentran las localidades arrasadas por el maremoto. Imágenes transmitidas por los medios de comunicación muestran a los pobladores en situación de gran precariedad, quienes han exigido a las autoridades actuar con mayor eficiencia en la entrega de alimentos y herramientas para rescatar algunos enseres atrapados en el barro.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de su secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, indicó que este terremoto no frenará la capacidad de

Chile para superar la crisis económica. Bárcena desestimó las cifras dadas por la consultora estadounidense Eqecat, la cual estimó los daños del terremoto entre US\$15 y \$30 millones.

“Dar esas cifras es inadecuado, nos parece hasta un poco irresponsable, porque para hacer una evaluación específica de los daños económicos hay que efectuar visitas a terreno y evaluar la infraestructura”, explicó Bárcena, agregando que la CEPAL ha nombrado un equipo encargado de realizar una valoración económica y social de esta tragedia.

El presidente electo Sebastián Piñera, quien asumirá su cargo el 11 de marzo, admitió que el desastre afectará los niveles de empleo. “Este terremoto, además de haber destruido la infraestructura, puede tener un impacto muy severo sobre los niveles de empleo”, dijo a la prensa. Informó que está trabajando junto con su equipo en un plan llamado “Levantemos Chile”, que incluye la reactivación de la economía, habilitación de instalaciones educativas y de salud y reconstrucción de las vías de comunicación.

Organización social

Compleja es la situación social que se vive en Chile. El terremoto dejó al descubierto una fractura del tejido social al constatar la debilidad de la organización popular.

“Cuando llegamos a Cobquecura [pueblo costero de la Región de Maule] nos dimos cuenta de que no están organizados equipos de trabajo desde el municipio ni de la organización social; nadie sabía cómo distribuir los alimentos, ni menos cómo coordinar a la gente”, explica Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), organización que recorrió parte del sur para constatar la situación rural.

Esta realidad se replicó en distintas localidades donde las organizaciones sociales se deterioraron por años de dictadura y por políticas sociales basadas en paternalismos. Sin embargo, otras organizaciones sociales y estudiantiles existentes presentaron una rápida respuesta que hoy busca levantar al país. Federaciones de estudiantes tomaron la iniciativa, como la de la Universidad de Chile, que instaló rápidamente en Santiago un centro de acopio para distribuir alimentos y ropa en el sur, con cientos de jóvenes voluntarios dispuestos a colaborar.

“Estamos conscientes de la cruda realidad por la que atraviesa el país en estos momentos. Por eso nos queremos sumar con todas nuestras energías y capacidades a los esfuerzos que se realizan para superar esta grave crisis que tanta pérdida y dolor está causando a miles de compatriotas”, indica el comunicado oficial de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

El movimiento campesino y el de las mujeres ya han comenzado a organizarse. Diversas organizaciones del campo e indígenas —como ANAMURI y la Confederación Ránquil, que agrupa a sindicatos de campesinos y grupos indígenas— junto a movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales han iniciado una campaña de apoyo que busca,

además de entregar apoyo solidario, reconstruir las redes sociales.

“Hemos iniciado esta campaña en donde queremos generar solidaridad que exija una organización social, y que se focalice en una reconstrucción participativa e inclusiva”, explicó Francisca Rodríguez, dirigente de ANA-MURI y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina (CLOC-VC). Esta campaña se iniciará con un catastro de la situación de las organizaciones campesinas de las regiones afectadas para luego apoyar en la restauración y en la reconstrucción del movimiento social.

Las diversas organizaciones que conforman el movimiento de mujeres realizarán este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, una acción solidaria que conmemorará la fecha, pero que además recolectará “cajas femininas”, que buscan llevar a las organizaciones del sur diversos elementos de uso exclusivo de las mujeres.

“Como todos los años las mujeres nos organizamos y esta vez hemos decidido hacer una acción que muestre la solidaridad de las mujeres con el país. Estaremos recolectando donaciones y a la vez informando sobre la si-

“Hemos iniciado esta campaña en donde queremos generar solidaridad que exija una organización social, y que se focalice en una reconstrucción participativa e inclusiva”.

— Francisca Rodríguez

tuación de las mujeres en Chile y nuestras demandas”, indicó Rosa Ferrada, dirigente del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH). □

CHILE

Benjamin Witte-Lebhar desde Santiago

Oposición en suelos movidos

Asume el primer presidente conservador elegido en más de 50 años.

Una serie de fuertes réplicas —la máxima alcanzó los 6.9° en la escala de Richter— del terremoto del 27 de febrero remecieron la zona central de Chile el 11 de marzo, llamando aún más la atención a lo que ya era un evento histórico para este país sudamericano: la juramentación del multimillonario empresario Sebastián Piñera como presidente para un mandato de cuatro años.

Con el piso literalmente moviéndose, Piñera recibió la banda presidencial roja, blanca y azul en un momento simbólico que marcó un cambio significativo para Chile.

Por primera vez desde el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-90) Chile giró a la derecha. De hecho, Piñera es el primer presidente conservador democráticamente electo desde 1958, cuando Jorge Alessandri (1958-64) asumió el poder luego de derrotar al entonces senador Salvador Allende. Recibió la posta de la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), de la centro-izquierdista Coalición Democrática, que gobernó por

dos décadas y dirigió la delicada transición de la dictadura a la democracia.

Como si el cambio de guardia no fuera ya suficientemente importante, la toma de posesión de Piñera se produjo dos semanas después de que Chile se viera sacudido por su peor desastre natural en 50 años: un devasta-



Principal prioridad para nuevo gobierno es la recuperación y la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto.

dor terremoto de magnitud 8.8° la madrugada del 27 de febrero que dejó unos 500 muertos y provocó daños por US\$30 millones.

Secuelas del desastre

Piñera ya ha dejado en claro que su principal prioridad ahora es la recuperación y la reconstrucción, lo que significa que sus grandes promesas de campaña —generar un millón de empleos y terminar con la pobreza, la corrupción y el crimen, así como mejorar los sistemas de salud y educación— tendrán que esperar.

Ahora sus primeras tareas serán modificar el presupuesto del 2010, recortando donde sea necesario para asegurar los fondos para la ayuda de emergencia y reconstrucción; relajar las regulaciones ambientales y de edificaciones para estimular la construcción, y establecer incentivos de deducción tributaria para las donaciones privadas.

“El mejor homenaje a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, a nuestros hermanos desaparecidos o damnificados y a esos miles de héroes anónimos, es trabajar sin descanso para superar esta emergencia y reconstruir mejor nuestras viviendas, nuestras escuelas y nuestros hospitales”, dijo Piñera en un mensaje a la nación el 18 de marzo.

Por ahora la Concertación Democrática ha aceptado respaldar los esfuerzos presidenciales. En efecto, en una reunión llevada a cabo cinco días antes del cambio de gobierno, los líderes de los cuatro partidos que conforman la coalición ofrecieron a Piñera una “tregua” temporal. Dicha tregua fue puesta a prueba el 17 de marzo cuando ambas cámaras del Congreso aprobaron una primera legislación enviada por el presidente: el llamado “bono marzo”, un pago de 40,000 pesos (\$80) que recibirán unos 4 millones de chilenos pobres y de clase media.

“Nuestra primera tarea es favorecer todas las políticas que busquen la reconstrucción social después del terremoto”, dijo el nuevo senador y presidente interino del Partido Socialista, Fulvio Rossi.

Los analistas coinciden en que la situación favorece a Piñera políticamente. No sólo le permite gobernar con una oposición mínima, sino que le da lo que hasta hace poco parecía una oportunidad improbable de convencer con su llamado a la unidad nacional, mensaje que ha repetido insistentemente desde que ganó la segunda vuelta en enero pasado.

Los riesgos del desarrollo

El terremoto, sostienen grupos como la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales (ACCION), expuso las graves deficiencias del modelo de desarrollo chileno, que fomenta la privatización, la inversión extranjera directa, la tercerización de funciones tradicionales del Estado y la desregulación en general. Aunque de hecho el modelo ha generado riqueza para algunos, los críticos afirman que ha ampliado la brecha de ingresos entre ricos y pobres, lo cual podría haber estado detrás de los violentos saqueos que se produjeron en Concepción y otras ciudades duramente golpeadas por el terremoto.

La comunicación también ha sido un pro-

blema grave. Al estar en manos privadas los servicios de telefonía celular y fija, el agua, la electricidad, el gas y hasta las propias carreteras colapsadas, ha sido extremadamente complicado para las autoridades coordinar una respuesta básica. El gobierno tampoco tiene acceso a la información que necesita para evaluar adecuadamente la situación, manifestó Claudia Liberona, vocera de ACCION y directora ejecutiva de la organización ambientalista Fundación Terram.

“Tres semanas después del terremoto y todavía no tenemos una cifra exacta del número de muertos. Las autoridades dicen que la van a entregar cuando tengan toda la información a la mano, pero ¿eso viene cuándo? Quizás en un año más”, dijo.

Una interpretación de la llamada tregua es que la Concertación, temerosa de distanciarse de la ciudadanía chilena que exige soluciones inmediatas, decidió que no podía afrontar políticamente el ser demasiado crítica de los esfuerzos de reconstrucción de Piñera. Otra posibilidad es que la coalición centro-izquierdista, a poco tiempo de su primera derrota presidencial, simplemente no ha podido asumir todavía su papel como oposición.

“En ninguno de los partidos ha habido elecciones internas, se pospuso un poco el debate

“Nuestra primera tarea es favorecer todas las políticas que busquen la reconstrucción social después del terremoto”. — Fulvio Rossi

hasta junio, aproximadamente. Más bien obedece a una rearticulación de fuerzas internas dentro de la Concertación que una tregua con el gobierno”, dijo Claudio Fuentes, director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.

Cualquiera que sea el motivo, la aquiescencia de la Concertación hace muy poco para ayudar realmente al país, tanto en el corto como en el largo plazo, dijo Fuentes, quien piensa que sí hay espacio para debatir incluso las estrategias de recuperación inmediata del gobierno. ¿Debería Piñera relajar las leyes ambientales? ¿Debería ofrecer incentivos tributarios para atraer donaciones privadas? ¿No haría mejor en generar ingresos elevando los impuestos a las grandes corporaciones?

“Hay muchos temas donde [la oposición] podría darle al gobierno como la venta de [el restante 11.3% de las acciones de Piñera en la aerolínea] LAN, la falta de compromiso en algunos ámbitos, falta de designaciones [para algunos puestos claves], y que el gobierno no ha hecho”, dijo Fuentes. “Obviamente hay que preocuparse de algunos temas prioritarios. Ahora, por ejemplo, el tema central es cómo financiarla [la recuperación y reconstrucción]. Y eso requiere la discusión sobre impuestos, uso de reasignación de fondos, uso de ahorros, y esa discusión hay que darla”. □

Acallada voz crítica

Gobierno obliga a compañías de cable a sacar del aire por segunda vez a RCTV.

Nuevamente los estudiantes fueron los protagonistas de las masivas manifestaciones contra el cierre de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV Internacional) en la capital venezolana y las principales ciudades del país. Las movilizaciones fueron duramente reprimidas por fuerzas gubernamentales, dejando como saldo la muerte de dos personas y gran número de heridos y detenidos.

La madrugada del 24 de enero, RCTV Internacional fue sacada del aire de la señal por cable luego que el ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Diosdado Cabello, anunciara el día anterior la aplicación de la nueva Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual, en vigencia desde el 22 de diciembre pasado, que establece una nueva calificación para medios nacionales e internacionales entre los canales que se transmiten por televisión paga.

RCTV fue cerrada por primera vez en mayo del 2007 cuando el gobierno le negó la renovación de la concesión para transmitir en señal abierta, acusándola de azuzar el fracasado golpe de Estado contra el presidente Chávez el 11 de abril del 2002. Esto obligó a la planta televisiva a salir al aire desde entonces sólo por suscriptoras de cable a nivel nacional e internacional, y pasó a ser RCTV Internacional.

Cabello informó el 23 de enero que las empresas de cable debían sacar de su programación a aquellos canales que no se habían declarado como medios nacionales no obstante contar con más de 70% de su programación hecha en Venezuela. Sólo están exceptuados de declararse como canales nacionales, de acuerdo con la norma técnica, aquellos que contengan “en su programación semanal más de 70% de programas, publicidad o propaganda que, en su conjunto, no califiquen como producción nacional”.

El declararse canales nacionales obligaba a RCTV Internacional y las otras televisoras (Ritmo Son, Momentum, America TV, American Network y TVN Chile) a regirse por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE), que regula sus pautas comerciales, el contenido de su programación y la transmisión de mensajes oficiales y en cadena.

“Aquí hay unos burguesitos y burguesotes que se dan el lujo de retar al gobierno”.

— Hugo Chávez

Ante la amenaza de sanción, las compañías de cable aplicaron la medida. Al respecto, Cabello precisó que “son las cableoperadoras las responsables de hacer que los canales que forman parte de su parrilla de programación cumplan o no con las leyes del país”. Agregó que la medida “será en completo cumplimiento de la ley”.

Las autoridades le dieron a RCTV Internacional un mes —desde el 22 de diciembre, día en el cual se presenta la norma técnica, hasta el 23 de enero que se le ordena a las cableoperadoras sacar del aire a RCTV Internacional— para reajustar su programación, bien sea para cambiar su programación a internacional o para presentar requisitos como canal nacional. Los directivos del canal se negaron a acudir a CONATEL para presentar la revisión de su programación, declarando en un comunicado que este es un hecho inconstitucional y arbitrario.

El propio presidente Hugo Chávez respondió en su programa dominical “Aló Presidente” que “aquí hay unos burguesitos y burguesotes que se dan el lujo de retar al gobierno. Está bien, si no acuden [a CONATEL] no tendrán más nunca salida. Es una decisión de ellos, no de nosotros”.

Diputados oficialistas de la Asamblea Nacional dieron su apoyo a la decisión tomada por CONATEL. El diputado Israel Sotillo, vicepresidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, argumentó que “es una medida temporal hasta que el canal acate las normas”.

“Estoy de acuerdo que se apliquen las medidas necesarias para penalizar aquellas empresas de comunicación que incumplan con la norma”, dijo a *Noticias Aliadas*, Ingrid Bournat, quien asegura no ser simpatizante del gobierno sino de los cambios que se están dando. “Esta medida está contemplada en el ordenamiento jurídico venezolano. El tema mediático es un tema delicado, nosotros sabemos el poder de los medios de comunicación y sobre todo el impacto que está generando en la sociedad civil la manipulación de la información”.

Descontento

Sólo habían pasado algunos minutos desde el anuncio de la medida emprendida por el Ejecutivo nacional cuando en las calles de Caracas comenzaron a escucharse cacerolas y a llenarse las calles aledañas a la sede de CONATEL por personas que manifestaban su descontento por la nueva salida del aire de RCTV.

“El cierre [de RCTV] es una demostración más que en este país no hay libertad de poderes, que no hay libertad de expresión, que no se respetan los derechos humanos”, dijo a *Noticias Aliadas* Ana Celia Goetz, una de las manifestantes en Caracas. “Quieren tener todos los medios bajo su dominio, debemos seguir luchando en las calles. No tenemos las armas, las armas las tienen ellos [el gobierno] pero seguiremos en la lucha democrática y con los votos sacarlo [a Chávez] de la presidencia”.

En un comunicado de prensa dos días antes de que fuera sacada del aire, la empresa televisiva había expresado que “el Gobierno necesita este nuevo cierre para frenar el creci-

miento de RCTV Internacional, canal líder en televisión por suscripción, crecimiento que ocasionó el incremento de la televisión paga en el país, hasta alcanzar más del 63% de penetración. Pretende tapan el rotundo fracaso del canal TVes [la estatal Televisora Venezolana Social], que ilegalmente colocaron en la señal libre y abierta de Radio Caracas Televisión y que aún funciona con los equipos robados a RCTV. Persigue favorecer, una vez más, a sus socios de negocios por todos conocidos”.

RCTV inició sus actividades en 1953. Actualmente pertenece al grupo venezolano Empresas 1BC, presidido por el empresario Marcel Granier. Considerado el canal privado más antiguo de Venezuela y el de mayor audiencia, ha mantenido una línea editorial crítica al gobierno de Chávez.

¿Sin libertad para decidir?

Representantes de las principales universidades del país, agrupados en el movimiento estudiantil que surgió en el 2007 por iniciativa propia, cuando RCTV salió de la señal abierta venezolana, también han expresado su descontento.

Roderick Navarro, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la principal del país, afirmó que permanecerán en las calles hasta que el gobierno recapacite ante el atropello hacia RCTV.

“Puede que esta acción esté disfrazada con

la legalidad, pero es evidente la persecución que existe por parte del Ejecutivo nacional a los que no aplauden como focas sus acciones”, dijo.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverría, dijo a *Noticias Aliadas* que “cada venezolano tiene derecho a ver y a pensar lo que quiera, no debe venir el Estado a decidir lo que debemos ver o hacer. Desde el Colegio Nacional de Periodistas, condenamos enfáticamente este acto de atropello contra RCTV”.

El futuro es poco alentador para RCTV Internacional. Si pasa a ser un canal de producción nacional deberá tener sólo un corte comercial por programa, lo cual ahuyentará a los anunciantes. Además, al ser la audiencia de la televisión por cable más reducida que la de señal abierta, los inversionistas difícilmente permitirán que el poco tiempo que tienen para publicidad se interrumpa para transmitir un mensaje oficial o una cadena. Por último, queda por ver qué pasará con los 1,500 trabajadores de esa televisora.

Mientras tanto, Chávez advirtió al movimiento estudiantil contrario al cierre de RCTV Internacional que “no podrán con nosotros, manitos blancas, burguesitos apátridas. Si nos provocan, tendrían una respuesta profunda, porque profundizaríamos la revolución. Mejor no nos provoquen, mejor no nos busquen. Ahora nos toca a nosotros construir la era del socialismo bolivariano”. □

HAITÍ

Ayuda llega a cuentagotas

En medio de violencia y saqueos, brigadas no se dan abasto para atender a cientos de miles de damnificados.

Rescatistas y brigadas de ayuda continúan tratando de encontrar sobrevivientes y llevar suministros vitales a los damnificados del terremoto de 7º que asoló Port-au-Prince, la capital haitiana, y decenas de localidades el 12 de enero.

Haití, el país más pobre de América, con 72% de sus casi 10 millones de habitantes viviendo en la pobreza, ha afrontado entre el 2001 y el 2008 desastres naturales, incluyendo violentos huracanes, que han dejado más de 18,000 muertos. Se calcula que entre 50,000 y 100,000 personas murieron a causa del terremoto;

tan amplio margen en los estimados se debe a la masiva destrucción y desorden que se ha apoderado de Port-au-Prince, a sólo 15 km del epicentro.

Los damnificados buscan desesperadamente sobrevivientes entre los escombros. Edificios emblemáticos de la capital, como el palacio presidencial, la catedral, la sede de las Naciones Unidas y el hospital general, se desplomaron.

Según un informe de Haiti Support Group (HSG), organización de solidaridad con el pueblo haitiano, citando información brindada por el ministro de Salud, Alex Larsen, hay 250,000

“Sólo tenemos nuestras manos para buscar sobrevivientes”.

— Jean-Baptiste Lafontin Wilfried

heridos y más de 1 millón de personas han quedado sin hogar.

“Hemos escuchado por la radio que los equipos de rescate vienen de afuera, pero nada está llegando. Sólo tenemos nuestras manos para buscar sobrevivientes”, dijo un residente, Jean-Baptiste Lafontin Wil-

fried, a HSG.

HSG agregó que “no hay señales” de la llegada de equipos pesados para remover los escombros.

“La rápida descomposición de los cadáveres también constituye un grave problema”, manifestó.

Jacky Dodard, residente en la capital, declaró a HSG que “lo que está ocurriendo aquí es que no hay ayuda en las calles. Personalmente, no he visto ninguna ayuda. Por eso todos están tratando de dejar los cadáveres en cualquier parte. No saben qué hacer con los muertos”.

Mientras tanto, la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, anunció que su país solicitará la condonación de la deuda contraída con el Club de París, que agrupa a los principales países acreedores y que asciende a US\$214 millones. La deuda externa total de Haití es de \$1.9 millardos.

—*Noticias Aliadas.*

En el fútbol, un rayo de esperanza

Emotiva presencia de equipo de fútbol femenino haitiano sub-17 en campeonato regional.

El fútbol es más que un juego para las integrantes de la selección nacional haitiana sub-17. Las 20 jugadoras que conforman el equipo se quedaron sin hogar luego del terremoto de 7° que devastó Haití el 12 de enero.

Las adolescentes viven en instalaciones provisionales cerca del estadio de Port-au-Prince, la capital, donde para ellas el fútbol pasó de ser un deporte a convertirse en su hogar, y el equipo en su familia.

Menos de dos meses después del terremoto que mató más de 220,000 personas, la selección, debatiéndose entre la pérdida y la depresión, partió para el torneo eliminatorio de fútbol femenino sub-17, organizado por la Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF por sus siglas en inglés), en Alajuela, Costa Rica, dándoles a sus compatriotas una pequeña señal de esperanza y recuperación luego de la muerte y la destrucción.

Desafíos dentro y fuera de la cancha

El equipo se encontraba entrenando en el estadio de Port-au-Prince cuando sobrevino el terremoto poco después de las 5 p.m. Las chicas durmieron en el estadio y al día siguiente salieron a buscar a sus familias.

“Caminaron seis o siete horas hasta sus casas”, dijo Georgelie Berry, vicepresidenta de la Federación Haitiana de Fútbol, al lado de la cancha donde el equipo practicaba. Muchas jugadoras viven en las provincias fuera de Port-au-Prince.

Para ellas, el trauma todavía está vívido.

“Antes del terremoto, el equipo era fuerte. Ha habido muchos problemas”, precisó Berry. “Ninguna de ellas tiene casa. Luego del terremoto dijeron que no se sentían bien, que les dolía la cabeza. Estaban pensando en sus familias. Pero estamos aquí para ganar”.

Pero casi todas las integrantes del equipo se presentaron en la cancha el 10 de marzo, para el partido inaugural del campeonato que daría plazas para la Copa Mundial Femenina Sub-17 en Trinidad y Tobago en setiembre próximo. Madeline Delice, de 16 años, no pudo. Su madre y su padre murieron en el terremoto, y según Berry no ha podido jugar.



Jugadoras haitianas contienen las lágrimas en torneo eliminatorio al mundial de fútbol femenino sub-17.

“Caminaron seis o siete horas hasta sus casas”.

— Georgelie Berry

Delice, arquera, peinada con pequeñas trenzas que llegan hasta la mitad de sus mejillas, se sentó en la banca, al lado de la cancha, con una pequeña bandera haitiana para ver a sus compañeras abrir el torneo en un difícil partido contra EEUU.

“Lloraban antes, durante y después del entrenamiento. Podían llorar, llorar y llorar”, dijo el entrenador del equipo haitiano James Morriset. “Estábamos obligados a venir y hacer lo mejor que podíamos para hacer sonreír al pueblo haitiano”.

La selección de EEUU, la favorita de las ocho competidoras, venció 9-0. Cuando terminó el partido, la arquera haitiana Alexandra Bell se desplomó en la cancha llorando. Varias jugadoras estadounidenses se le acercaron y la abrazaron.

“Luego del partido vi que algunas de las chicas estaban llorando un poco”, dijo el entrenador del equipo estadounidense, Kazbek Tambi. “Por un lado ellas habían venido a jugar buen fútbol y a ganar, y por el otro, el hecho de que estábamos jugando contra Haití y las derrotamos por goleada dio un poco de pena hasta dentro de nuestro grupo, porque eran nuestras primeras adversarias”.

Luego del partido frente a EEUU, los asistentes al estadio, incluyendo el equipo de las Islas Caimán, que más tarde derrotó a Haití por 1-0, sellando su eliminación de la Copa Mundial Femenina Sub-17, gritaron “¡Hai-tí! ¡Hai-tí! ¡Hai-tí!”. El fracaso en el torneo no había llegado a eclipsar la señal que su presencia mostró a los haitianos y sus vecinos. □

Abrumadora victoria de Chinchilla

Candidata de derecha se convierte en primera mujer presidenta.

Laura Chinchilla hizo historia en este pequeño país el 7 de febrero cuando los costarricenses la eligieron abrumadoramente como la primera mujer presidenta del país.

Pero si bien la ex vicepresidenta y ministra de Seguridad rompió el molde en la más antigua democracia de América Central, su victoria sigue a un desplazamiento hacia la derecha en toda América Latina, al revés del ciclo electoral anterior hace media década.

Chinchilla obtuvo casi 47% de los votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones, más del doble que sus dos más cercanos rivales.

Su triunfo abatió las esperanzas de la agobiada izquierda costarricense. El tres veces candidato opositor Ottón Solís, quien fue derrotado por el actual presidente Oscar Arias en las disputadas elecciones del 2006, y lideró un movimiento para bloquear el Acuerdo de Libre Comercio de América Central y República Dominicana (TLCAC+RD) con EEUU, quedó segundo con 25% de la votación.

El día siguiente de las elecciones, Solís, un centroizquierdista del Partido de Acción Ciudadana, y acérrimo promotor de las cuestiones ambientales y los derechos comerciales del país, dijo que pondría fin a su carrera política y descartó una cuarta postulación a la presidencia en el 2014, con lo cual debilita aún más las ya débiles corrientes izquierdistas en este país de 4 millones de personas.

Otto Guevara, el candidato derechista del Partido Movimiento Libertario, que vio un rápido ascenso en las encuestas poco antes de las elecciones, quedó tercero con alrededor de 22% de los votos.

¿Victoria para las mujeres?

Chinchilla, a quien Arias preparó para la presidencia, evocó temores de algunos votantes de que gobernaría Costa Rica siguiendo incondicionalmente las líneas de su Partido Liberación Nacional, el más antiguo y poderoso del país.

En su discurso de victoria en el estacionamiento de un hotel, Chinchilla agradeció a “las pioneras que han abierto la senda de la participación política de la mujer en Costa Rica”.

“Todas ellas, y también los hombres que las han acompañado en esta causa, han hecho posible que una hija de este país pueda hoy ser



Laura Chinchilla

presidenta de la República”, dijo.

Más de 60% de mujeres votaron por Chinchilla, una conservadora que se opone al aborto y al matrimonio gay, que postuló con una plataforma que abogaba por el libre comercio y una línea dura contra el delito, especialmente el crimen violento que se deriva del narcotráfico, pero con poca atención a las cuestiones de la mujer.

Los votantes más jóvenes prefirieron a Solís, como muchos de los ambientalistas de Costa Rica.

El país se enorgullece de su protección ambiental: la mitad de Costa Rica está cubierta de árboles. El gobierno de Arias ha llamado a profundos recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero de las naciones industrializadas y ha establecido como meta para su país ser carbono neutral para el 2021.

Sin embargo, al mismo tiempo Arias ha levantado una moratoria sobre la minería a cielo abierto, y sus críticos dicen que ha invitado al sobrecrecimiento inmobiliario a lo largo de la costa del Pacífico.

Algunos ambientalistas temen que Chinchilla continúe estrechamente la línea de Arias. La presidenta electa está a favor de atraer nueva inversión extranjera, especialmente luego de la crisis financiera que golpeó a Costa Rica en la forma de un descenso en picada del turismo, su principal fuente de ingresos, y de la inversión inmobiliaria.

“Yo creo que ha sido el gobierno mas agresivo en términos ambientales en los últimos 20 años”, dijo Alberto Cortés, director de estudios ambientales de la Universidad de Costa Rica. “Me parece que ha tomado decisiones que son largamente enemigas de la naturaleza. Este gobierno subordinó la política ambiental a la lógica empresarial”. □

¿Educación superior manipulada por mineras?

Polémica en universidades públicas por financiamiento con regalías mineras.

El rechazo el año pasado de tres universidades nacionales argentinas a recibir fondos mineros, inició un debate sobre la pertinencia de aceptar financiamiento proveniente de actividades que tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. Algunos plantean que ese dinero puede significar una intervención de las empresas en los planes de estudio, mientras que otros consideran que aporta al presupuesto universitario.

A lo largo del 2009, tres universidades nacionales —Córdoba (UNC), Río Cuarto (UNRC) y Luján (UNLu)—, 26 facultades y tres unidades académicas rechazaron los fondos mineros. La oposición comenzó en el 2008, cuando la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” no aceptó el dinero. Entre otros argumentos el Consejo Asesor Zonal de dicha universidad enfatizó que el pueblo de Esquel rechaza ampliamente la megaminería por ser una actividad contaminante —como lo manifestó en el 2003 cuando en una consulta popular el 81% de la población votó por la no explotación de un yacimiento de oro cercano a la localidad—, y que dicha unidad académica no era ajena a la voluntad de la ciudadanía.

En ese momento las utilidades mineras recibidas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —instancia de coordinación de políticas universitarias—, para administrar entre las 40 universidades nacionales del país, ascendían a 50 millones de pesos (US\$13.2 millones).

En el contexto del proceso de movilización popular, iniciado en el 2002, contra el emplazamiento de proyectos de megaminería a cielo abierto en la Cordillera de los Andes, la distribución de 36.8 millones de pesos (\$9 millones) entre las universidades nacionales, correspondientes a las utilidades de la explotación del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD), agitó las aguas en la comunidad académica.

Origen de los fondos

En 1948 fue descubierta en la provincia noroccidental de Catamarca la mina de oro y co-



Población rechaza minería por su impacto negativo en medio ambiente.

Los fondos “proviene de una actividad destructiva y contaminante”.

— Adolfo Pérez Esquivel

bre Aguas de Dionisio, cuya propiedad quedó en manos del gobierno catamarqueño, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Estado Nacional, que conformaron el organismo interestadual YMAD. A mediados de la década de 1990, en el marco de una reforma neoliberal del Estado impulsada por el gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem (1989-99) que generó condiciones ventajosas para el desarrollo de proyectos mineros, el YMAD se asoció a Minera Alumbraera Ltd., perteneciente a la corporación suiza Xstrata Plc (50%) y las canadienses Goldcorp Inc. (37.5%) y Yamana Gold (12.5%), para la explotación del yacimiento.

Desde 1997 esta Unión Transitoria de Empresas (UTE) opera en Bajo La Alumbraera. El sector privado se alza con el 80% de las utilidades, mientras que al organismo interestadual le corresponde el 20%. Según la ley 14.771 de 1958, que legisla al YMAD, el 60% de los beneficios son para la provincia de Catamarca y el 40% se divide en partes iguales entre la UNT y el Estado Nacional, que está obligado a destinar los fondos al sostenimiento de las universidades públicas. En síntesis, el 4% de las utilidades de la explotación de la mina llega al CIN.

En los últimos 10 años se sucedieron denuncias contra el emprendimiento minero por filtración de drenajes ácidos y derrames por roturas del mineraloducto de 316 km de largo que transporta un caldo mineral hasta la provincia de Tucumán. En mayo del 2008 la Cámara Federal de Tucumán N° 2 procesó al vicepresidente de Minera La Alumbraera, Julián Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, causa que aún sigue abierta.

Argumentos en contra

El 10 de junio último el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al CIN y a los rectores de todas las universidades nacionales pidiendo el rechazo de los fondos porque “proviene de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de la población”.

nes aledañas al mega-emprendimiento”.

Un argumento similar esgrimió Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva de la UNC, presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente y uno de los artífices del “no a los fondos minero” de la Universidad Nacional de Córdoba. En sus intervenciones insistió en que la explotación del yacimiento demanda diariamente 95 millones de litros de agua en una región semiárida.

“El rechazo incluye la capacidad de escucha, el respeto y la sensibilidad de la comunidad universitaria ante las voces ciudadanas, los reclamos colectivos y las afecciones intersubjetivas [cambios a nivel cultural, de valores, de formas de relacionarse con el territorio] que produce la implementación del modelo extractivo de la megaminería. Estas últimas van más allá de los impactos ambientales, para anclarse en el núcleo de los lazos sociales, la diversidad cultural, los derechos humanos y el sufrimiento psíquico de pobladores”, sostuvo Mirta Antonelli, docente investigadora de la Facultad de Filosofía e Humanidades de la UNC, en diálogo con *Noticias Aliadas*.

“Los ejes del debate procuraron dar cuenta de todos los aspectos implicados en el modelo de la megaminería: las leyes que la rigen desde los 90, los impactos ambientales, sanitarios, patrimoniales, culturales; las modalidades de cooptación, compra de conciencia de las empresas y la connivencia de gobiernos de distintas jurisdicciones”, señaló.

En tanto, los sectores que aceptaron los fondos plantearon diferentes argumentos, desde la formalidad de cumplir con lo que manda la ley 14.771 a la puesta en duda o el rechazo de

los impactos negativos derivados de la explotación de dicha mina.

“No incorporar ese dinero al presupuesto —que como todo dinero puede ser considerado sucio, o como se lo quiera tildar, ya que hablamos de la madre de las mercancías del sistema capitalista— nos llevaría lógicamente a renunciar al presupuesto mismo de las universidades públicas que, como todos sabemos, se compone de otros dineros procedentes de actividades muy cuestionables. Por ejemplo, el que proviene de las retenciones a la producción sojera”, relativizó Hugo Trincherero, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de un comunicado difundido a fines de agosto.

Por su parte, Antonelli subrayó que esta polémica “abre a una discusión más amplia: cuáles son las políticas científicas que se han diseñado, sus relaciones con el sector empresarial —no sólo minero—, y qué semántica del ‘desarrollo’ se viene institucionalizando para avalarlas”.

Consultado por *Noticias Aliadas*, Jair Zolotow, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA —la única que rechazó los fondos dentro de esa universidad—, señaló que “si bien la plata es parte del 20% que recibe el Estado Nacional por YMAD, aceptarla es una forma de legitimar las actividades empresariales y dejarse intervenir por las empresas, que terminan marcando la agenda de los planes de estudio [ya que los adecuarían a las necesidades de las empresas]. El dirigente estudiantil afirmó que “hay casi 5,500 convenios de empresas privadas con las universidades públicas”. □

AMÉRICA LATINA / EL CARIBE

Magali Zevallos desde Lima

Acuerdo de cumbre no es vinculante

Copenhague ha puesto en marcha debacle ambiental.

Pese a que diversos organismos internacionales han pedido prestar atención a América Latina —la región con mayor biodiversidad y reservas naturales del mundo— por ser la que sufre consecuencias de manera desproporcionada por efectos del cambio climático, la XV Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático no significó avances para encontrar soluciones a la crisis climática.

Reunidos del 7 al 18 de diciembre en Copenhague, Dinamarca, 192 países de todo el mundo —incluyendo a naciones pobres altamente vulnerables, grandes economías emergentes y naciones ricas— no cumplieron con las expectativas de lograr un acuerdo vincu-

lante y el compromiso de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

El acuerdo —liderado por EEUU, China, India, Brasil y Sudáfrica— a que arribó la cumbre señala que los países ricos donarán US\$300 millones en ayuda climática a los más pobres en el periodo 2010-2012 y eventualmente \$100 millones anuales hacia el 2020. Además que deben reducirse las emisiones de gases de carbono lo suficiente como para mantener el aumento en las temperaturas mundiales promedio debajo de los dos 2° centígrados. Sin embargo, no señala cuales serán el condicionamiento para la financiación y tampoco hay fechas límites para reducir las emisiones de CO₂.

América Latina sin una propuesta conjunta

Cinco presidentes latinoamericanos (Bolivia, México, Venezuela, Brasil, Colombia) participaron en la Cumbre Copenhague, el discurso común de los países latinoamericanos fue la desigualdad. Aunque no hubo una propuesta conjunta pese a ser la región más vulnerable al cambio climático, se presentaron iniciativas que llamaron la atención, como el proyecto Yasuní-ITT del Gobierno ecuatoriano, que consiste en mantener el crudo bajo tierra, es decir dejar de extraer 846 millones de barriles de crudo en un campo petrolífero situado en una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, para evitar la emisión de unos 407 millones de toneladas de CO₂.



GABRIEL HERRERA

Pueblos indígenas padecen efectos adversos de condiciones meteorológicas cada vez más difíciles y variables.

América Latina está particularmente afectada por la variabilidad del clima, ya que la economía de la región depende de los recursos naturales.

Otra propuesta interesante fue la presentada por Perú, el programa ambiental llamado Conservando Juntos, el cual busca incentivar la conservación y uso del bosque en pie para conservar, en 5 años, al menos 10.5 millones de hectáreas de bosques en la selva peruana, a cargo de las comunidades indígenas de ese país.

El único país de América Latina que tuvo un rol protagónico en la cumbre fue Brasil, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en el momento de su discurso planteaba la necesidad de acciones concretas y justas, donde se incluyan la participación de cada país, donde se respete el principio de responsabilidad común, sin embargo, terminó sorprendiendo cuando se alineó a la posición de Estados Unidos, China, India y Sudáfrica.

Mientras que los países miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), Venezuela, Nicaragua, Cuba, y Bolivia expresaron su indignación, tomaron sus distancias y por ser los más excluidos del proceso de decisión. El pronunciamiento que emitieron de los resultados de la cumbre remarca que se

impuso un acuerdo sin resultados justos y balanceados, que condena al 80% de la población mundial a vivir en el subdesarrollo.

Las amenazas del clima

Según el Banco Mundial, los países de América Latina y el Caribe son sólo responsables del 12% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, América Latina está particularmente afectada por la variabilidad del clima, ya que la economía de la región depende de los recursos naturales, según el informe Stern, preparado en el 2006 para el gobierno de Gran Bretaña por el economista Nicholas Stern —ex economista en jefe del Banco Mundial y funcionario del gobierno británico. Actualmente Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú sufren las consecuencias socioeconómicas de la variabilidad del clima. Perú, por ejemplo, está entre los 10 países más vulnerables al cambio climático.

La variabilidad climática y los eventos extremos harían que hacia fines de siglo el costo de los desastres climáticos en la región alcance un máximo posible de \$250 millardos, señala el reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis 2009”. Esto representa un drástico aumento considerando que ese costo para el periodo 2000-2008 ha sido de \$8.6 millardos anuales.

En el periodo comprendido de 1970 a 2008, la suma de los daños económicos provocados por los fenómenos de origen hidrometeorológico alcanzó alrededor de \$80 millardos.

El informe estima que se necesita una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático y que de no hacerse dicha inversión el mundo se expondría a una recesión que podría alcanzar el 20% del PIB global. El informe también sugiera la imposición de ecotasas para minimizar los desequilibrios socioeconómicos.

El estudio alerta que en América Latina el número de personas afectadas por este problema oscilaría entre 12 y 81 millones para el 2025, y de 79 a 178 millones en el 2055. Los países del Caribe podrían afrontar dificultades para abastecer su demanda hídrica durante los períodos de bajas precipitaciones, ya que algunas islas dependen en gran medida de las fuentes superficiales.

La población que depende del suministro de agua proveniente del deshielo se vería afectada en la estación de seca. Es el caso de millones de personas que habitan en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, donde se observa un retroceso del nivel de los glaciares que ya viene afectando severamente la producción agrícola y en los próximos años la seguridad alimentaria.

Mientras que para EEUU y China, los países más contaminadores del mundo, las negociaciones fueron exitosas, lo cierto es que la cumbre terminó siendo un verdadero fracaso sin acuerdos vinculantes, donde los países industrializados terminaron eludiendo responsabilidades ante el mundo y aplazaron una vez más la deuda ecológica con los países pobres. □



Muchas muertes se pudieron evitar en el terremoto que asoló el sur del Perú en el 2007 con un plan de prevención.

PERÚ

Ramiro Escobar desde Lima

En riesgo la “gestión del riesgo”

Políticas públicas de prevención no amenguan la vulnerabilidad del territorio.

Cual reflejo condicionado, el violento terremoto que asoló Chile el 27 de febrero causó preocupación en el Perú, despertó conciencias dormidas e incluso desató decisiones políticas, algo que también ocurrió hace casi tres años tras el sismo que devastó la costa del centro-sur del Perú el 15 de agosto del 2007 y que causó la muerte de 500 personas.

Pocos días después del sismo chileno, el presidente Alan García anunció un “Plan Nacional de Prevención contra Sismos” y la compra de un sistema de alerta local para prevenir tsunamis.

Esto último había sido demandado hacía meses por Ronald Woodman, presidente del Instituto Geofísico del Perú, sin que el Ministerio de Economía, el Congreso y el resto del Ejecutivo atendieran el pedido, a pesar de que luego del terremoto del 2007 existió peligro de tsunamis.

“La verdad es que en estos asuntos seguimos siendo básicamente reactivos”, dice Pedro Ferradas, encargado del programa de prevención de desastres de la organización de apoyo técnico y desarrollo sostenible ITDG-Soluciones Prácticas.

Para este especialista en prevención de desastres, sin embargo, el problema es más complejo que adquirir nuevas tecnologías que, siendo importantes, no curan los vacíos institucionales. Un problema, entre varios, añade, es la “falta de criterios unificados” para enfrentar una emergencia sísmica. Hay más de una versión de lo que hay que hacer.

Autoridad que no funciona

Ferradas anota que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), órgano rector del Sistema de Defensa Civil (SINADECI) en el Perú, debería haber determinado ya cuál es el sistema aceptado, socialmente y por las autoridades, para enfrentar un sismo.

“Es una autoridad vertical, que funciona de arriba hacia abajo, pero que tiene deficiencias”, sostiene.

El INDECI fue creado en 1973, en tiempos del gobierno militar (1968-80). Su jefe máximo siempre ha sido un militar y su estructura en sí, según Ferradas, guarda esa impronta.

“En las últimas gestiones, a partir del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), se ha mostrado una mayor apertura, aunque eso no basta”, apunta.

Además, el asunto es de importancia literalmente vital ya que, tal como lo recuerda José Sato, del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES), en el Perú hay varias amenazas constantes y latentes. La principal de ellas, afirma, son los fenómenos hidrometeorológicos, como las inundaciones, sequías y huaycos (palabra quechua para designar aludes de tierra y agua).

Pero también están el fenómeno de El Niño y terremotos como el de agosto del 2007 al que le siguió una lenta y caótica distribución de la ayuda. Hasta ahora hay continuos reclamos por lo lento de la reconstrucción, especialmente la devastada ciudad de Pisco, que no ha marchado al ritmo prometido por el gobierno de García.

“Nuestra mayor vulnerabilidad es la pobreza”, anota Sato, para poner en evidencia que los desastres no son naturales, como se proclama, sino sociales. La falta de coordinación y los vacíos institucionales caen sobre un escenario marcado por la falta de calidad de vida de la población por la falta de una autoridad que evite desbordes sociales de imprudencia.

Mucha gente en el Perú construye su vivienda sobre suelos arenosos en la costa —donde viven dos tercios de la población—, de manera precaria, o se asienta en el cauce de los ríos, al alcance de cualquier crecida.

“La falta de un vínculo más fluido entre los municipios y la Defensa Civil provoca estos escenarios”, explica Ferradas, con preocupación por la manera como proliferan estos descuidos.

De acuerdo con la ley vigente, todo municipio debe tener un Comité de Defensa Civil, presidido por el alcalde e integrado por otras autoridades —policiales, eclesiásticas y de otros sectores gubernamentales—, así como por organizaciones de la sociedad civil. Existe, además, un secretario técnico, que es además jefe de la Oficina de Defensa Civil distrital.

En los hechos, sin embargo, y como coinciden Ferradas y Sato, el puesto a veces es asumido por personas que no están capacitadas para el cargo o se le endosa a un funcionario que tiene otros deberes. Con ello, la antecala para que se otorguen licencias de construcción en sitios indebidos y otros desvaríos está lista. Y el riesgo crece.

Muertes inútiles

En febrero de este año, numerosos turistas quedaron varados en Aguas Calientes, localidad cusqueña que está al pie del sitio arqueológico de Machu Picchu. Una turista argentina y un guía murieron arrasados por un huayco en una temporada de intensas lluvias en la que dicha ruta resultaba especialmente peligrosa.

Por la misma época, las localidades cusqueñas de Zurite y Taray también sufrieron inundaciones y huaycos. En esta última localidad llegaron a morir al menos siete personas. Estos dramáticos casos evidencian que la gestión de riesgos en el Perú es aún débil, insuficiente o, como dice Ferradas, “no está incluida en los planes de desarrollo”.

La gestión de riesgos en el Perú “no está incluida en los planes de desarrollo”.

— Pedro Ferradas

Sato agrega que no debería esperarse estas desgracias para reaccionar, que la gestión del riesgo debería ser algo “del día a día” y que la propia población debería involucrarse más. Esa mayor anticipación dependería, entonces, de los planes educativos, algo que el Ministerio de Educación tiene en cuenta, pero que en los colegios es algo relativo.

Depende, como observa Ferradas, de los liderazgos que surjan en las propias escuelas y de que se tome en serio los simulacros y otras medidas preventivas. De hecho, resultó muy sintomático que, sólo después del anuncio de García sobre el “Plan Nacional de Prevención contra Sismos”, este ministerio anunciara un cronograma de simulacros.

Es posible que éstos estuvieran previstos, pero, en todo caso, se conocieron casi repentinamente, después del terremoto de Chile. Lo claro es que los años pasan y que la gestión del riesgo en el Perú es todavía una asignatura pendiente para las autoridades y la ciudadanía, que sigue guardando en su memoria varias tragedias de gran magnitud.

La peor de ellas fue el terremoto de Ancash, acaecido el 31 de mayo de 1970, que causó decenas de miles de muertos debido a que generó un aluvión que sepultó casi por completo la ciudad de Yungay. Hoy, 40 años después, se habla de un probable sismo de enorme intensidad en Lima como acto reflejo de un terremoto vecino, pero sin que la gestión del riesgo sea pan de cada día. □

GUATEMALA

Hambruna se agudiza

Retraso en temporada de lluvias agrava abastecimiento de alimentos.

La demora en el inicio de la temporada de lluvias como consecuencia del fenómeno de El Niño agravará la crisis alimentaria que enfrenta Guatemala desde el año pasado a consecuencia de una prolongada sequía, y podría afectar a dos millones de personas, afirma un informe presentado el 5 de marzo en Ginebra por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter.

René Mauricio Valdés, representante de la ONU en Guatemala, indicó en conferencia de prensa en Ginebra que el retraso de la temporada de lluvias, que debería iniciarse en mayo, afectará las cosechas y que la crisis alimentaria amenaza con extenderse a otras zonas del país.

“La sequía continúa y podría empeorar”, dijo Valdés. “Las lluvias probablemente lleguen en la segunda mitad del año”.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Alimentaria del gobierno de Guatemala, Lily Caravantes, manifestó que en el 2009 145,000 familias perdieron sus cosechas por la falta de lluvias, y advirtió que la situación podría empeorar “porque este año se espera otro [prolongado] verano”, en

referencia a la falta de lluvias.

En setiembre del año pasado, el presidente Álvaro Colom decretó “estado de calamidad pública” para hacer frente a la crisis alimentaria producto de la sequía.

En el llamado “corredor seco”, que abarca los departamentos de Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Santa Rosa, Zacapa, Jutiapa y Jalapa, el año pasado murieron de hambre 240 personas adultas, en su mayoría mujeres y madres jóvenes, y 54 niños, cifra que se podría incrementar este año. En enero y febrero se han registrado 4,000 casos de niños con desnutrición aguda en esta región.

Guatemala es el país con mayor índice de desnutrición de América Latina y el cuarto a nivel mundial, con 43% de los niños y niñas menores de cinco años afectados por la desnutrición, según la ONU.

Valdés señaló que aunque la sequía es periódica en Guatemala, el cambio climático la ha convertido en “más frecuente, más larga y más seca”. De hecho, agregó, Guatemala es considerado como “uno de los 10 países del mundo más vulnerables al cambio climático”.

De acuerdo con la ONU, 77% de las familias del “corredor seco” agotaron en enero sus reservas de alimentos, y los cultivos de maíz están devastados. En total, agrega, 2.7 millones de personas (casi 20% de los 14 millones de guatemaltecos) se han visto afectadas por la peor sequía que ha experimentado el país en 30 años.

De Schutter recomendó a las autoridades gubernamentales incrementar la carga tributaria para financiar los programas sociales y aumentar el salario mínimo, que actualmente asciende a 56 quetzales (US\$7) diarios.

—Noticias Aliadas.

Ecología rompe al gobierno

Presidente Correa pone en riesgo iniciativa para proteger zona de alta biodiversidad.

El fraccionamiento gubernamental que no pudo provocar la oposición de la derecha, ni los grupos izquierdistas radicales, lo hizo el propio presidente Rafael Correa al intentar echar abajo el proyecto ecológico insignia del denominado Socialismo del Siglo XXI: dejar bajo tierra una importante reserva petrolera en una zona de alta biodiversidad, conocida como iniciativa ITT.

ITT es el nombre con que se conoce al bloque de explotación petrolera Ishpingo Tiputini Tambococha, situado en el Parque Nacional Yasuní, en la provincia amazónica de Orellana, que, según los estudios realizados, contiene 856 millones de barriles de petróleo, cuya explotación le generaría al Estado unos US\$7 millardos.

Yasuní es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y ha sido declarado como zona intangible y patrimonio nacional ecuatoriano; incluso está protegido a través de claros preceptos constitucionales pues, entre otros, el artículo 407 de la Constitución establece: Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.

El ritmo de inversión social implementado por Correa necesita de una constante inyección de recursos financieros, y el ITT, al igual que la minería a gran escala, se perfilan como la mejor fuente de estos recursos. Pese a ello, el gobierno decidió, el 22 de abril del 2009, hacerle a la comunidad internacional una propuesta innovadora: dejar el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación financiera internacional, calculada en \$3.5 millardos, es decir, la mitad de lo que el gobierno percibiría con la explotación petrolera del ITT.

El argumento de esta propuesta —que fue esbozada inicialmente en el 2007— se basa en la necesidad de reducir la emanación de gases que provocan el deterioro ambiental, evitando quemar el petróleo del ITT; para lo cual, los países de mayor consumo de petróleo, agrupados en la denominada canasta de donantes y

conscientes de ser los mayores responsables del deterioro ambiental, compensarán al Ecuador con la mitad de los ingresos que dejará de recibir al no explotar el petróleo del ITT. La otra mitad sería el aporte ecuatoriano para la preservación del planeta.

Se planificaba firmar este acuerdo entre el Ecuador y Francia, Alemania, Holanda, Hungría, entre otros países que ya se habían comprometido a participar en la canasta de donantes, representados por el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de la XV Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en diciembre en Copenhague, pero esto no ocurrió así.

Correa se echa para atrás

Correa se negó a firmar el acuerdo aduciendo una interferencia en la soberanía nacional.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, realizó algunas observaciones al proyecto, entre ellas el que se estaría renunciando a la soberanía sobre los recursos generados porque se encargaba su administración al PNUD. Las observaciones de Mera fueron acogidas por Correa, quien fustigó a la Comisión Negociadora del ITT, encargada de convencer a los países desarrollados a que sumen sus aportes a la iniciativa ecuatoriana, a la que acusó de hacer una canallada y haberle clavado un puñal por la espalda.

“Si es así, quédense con su plata y en junio empezamos a explotar el ITT. Aquí no vamos a claudicar en nuestra soberanía. Entiendan que los que más sacrificio estamos haciendo somos los ciudadanos de Ecuador; en cualquier parte del mundo hubieran explotado el petróleo”, dijo Correa. Al anunciar la explotación del ITT desde junio próximo, Correa olvida lo establecido en la propia Constitución ecuatoriana.

Lo irónico del caso es que quien lideraba la Comisión Negociadora del ITT era el propio canciller, Fander Falconí, considerado como uno de los ideólogos del movimiento que llevó a la presidencia a Correa y una de las personas más leales al mandatario. Falconí también fue el creador de la propuesta del ITT, pues para él no sólo significaba un proyecto de ingresos financieros, sino la base misma de la transformación del modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales y el caminar hacia un modelo sustentado en la ecología.

El 12 de enero Falconí renunció a la Cancillería tras realizar una rueda de prensa en la que explicó pormenorizadamente su trabajo en pro de la soberanía nacional y la planificación de un Estado basado en la inversión social y la ecología; finalmente aseguró que el fracaso de las negociaciones de la iniciativa del ITT lo había distanciado con el presidente y su equipo de gobierno y por eso dejaba su cargo.

El 12 de enero Falconí renunció a la Cancillería tras realizar una rueda de prensa en la que explicó pormenorizadamente su trabajo en pro de la soberanía nacional y la planificación de un Estado basado en la inversión social y la ecología; finalmente aseguró que el fracaso de las negociaciones de la iniciativa del ITT lo había distanciado con el presidente y su equipo de gobierno y por eso dejaba su cargo.



Río en Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares de mayor biodiversidad en el planeta.

LUIS ÁNGEL SAAVEDRA

“La Iniciativa Yasuní ITT merece un compromiso mucho más explícito que la fijación de un plazo perentorio de seis meses para acopiar los recursos financieros requeridos, pues su trascendencia marca la diferencia de sustancia de un proyecto político, que en su esencia propone un cambio de forma de vida. Cambio perfectamente respaldado en la Constitución”, aseguró el ex canciller.

“No sólo pierde un canciller, Correa pierde a uno de los mejores cuadros, al ideólogo del movimiento”, asegura Alberto Acosta, ex ministro de Energía de Correa y también fundador de la oficialista Alianza País.

La dimisión de Falconí provocó la renuncia de otros funcionarios y militantes que aportaron mucho en la consolidación de Alianza País como Francisco Carrión, ex canciller del gobierno de Alfredo Palacio (2005-2007) y que ahora desempeñaba las funciones de embajador ante las Naciones Unidas. Falconí y Carrión se habían convertido en un icono de la soberanía nacional durante la serie de incidentes suscitados en la frontera colombo-ecuatoriana luego del bombardeo de Angostura, perpetrado por fuerzas colombianas en marzo del 2008.

Mandatario se rectifica

Correa intentó frenar la desbandada política de sus co-idearios rectificando su anuncio de explotar el ITT a partir de junio próximo y asegurando que la propuesta de dejar el crudo

del ITT bajo tierra seguía siendo la prioridad del gobierno. A partir del 14 de enero empezó la conformación de una nueva comisión negociadora, esta vez encabezada por la ex canciller María Fernanda Espinoza y el vicepresidente Lenin Moreno, oriundo de la Amazonia.

“Estoy doblemente involucrado, porque soy defensor de mi tierra y del medio ambiente. Yo soy del Yasuní, nací en Nueva Rocafuerte, y vamos a luchar con mucho más vigor por esta causa”, dijo Moreno.

Sin embargo, las pérdidas políticas no serán fáciles de reparar y menos la credibilidad perdida en los círculos ecologistas internacionales y en los gobiernos que habían comprometido su aporte a la propuesta ecuatoriana. Por lo pronto, únicamente Hungría ha ratificado que seguirá en el proceso.

En lo interno, Correa enfrenta una avalancha de críticas de ecologistas, unos de larga y honesta trayectoria, y otros que ven la oportunidad de minar la fuerza del gobierno.

Sin embargo el presidente, lejos de diferenciar las intenciones de las críticas surgidas, arremetió nuevamente contra los ecologistas: “Ahora veo claro lo que ha pasado, no hemos estado negociando con los supuestos donantes, sino con el ecologismo infantil. Ahora aparecen los que están manejando el proceso y son los que han querido imponer condiciones inadmisibles al país”, dijo el mandatario en su alocución radial de los sábados. □

MÉXICO

Al declara a indígenas presas de conciencia

Dos indígenas hñahñus permanecen injustamente encarceladas.

Alberta Alcántara Juan, de 31 años y Teresa González Cornelio, de 25, encarceladas desde agosto del 2006, fueron declaradas el 12 de febrero “presas de conciencia” por Amnistía Internacional (AI).

Las indígenas hñahñus fueron condenadas sin pruebas a 21 años de cárcel por el supuesto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) —ahora Policía Ministerial Investigadora— el 26 de marzo del 2006, cuando éstos intentaban extorsionar a los vendedores y decomisar ilegalmente la mercadería que ofrecía en una feria de la comunidad de Santiago de Mexquititlán, al sur del céntrico estado de Querétaro. Ambas se encuen-

tran esperando un nuevo juicio.

De acuerdo con la versión de los agentes, las dos mujeres y otros vendedores los tomaron de rehenes para evitar el decomiso de productos piratas.

“No existe ninguna evidencia creíble en contra de Alberta y Teresa”, dijo Rupert Knox, investigador de AI sobre México, en conferencia de prensa. “Nosotros creemos que han sido elegidas como blancos fáciles por su situación marginal como mujeres, pobres e indígenas”.

Al sostiene que la única prueba en su contra es una fotografía publicada en un diario local en la cual Alcántara Juan y González Cornelio aparecen al lado de los agentes de la AFI.

“El caso es emblemático”, afirmó Knox, “ya que

muestra la discriminación y juicios injustos que muchos y muchas indígenas enfrentan en el sistema de justicia penal mexicano. El gobierno mexicano debe liberarlas inmediatamente sin ninguna condición. Además se debe asegurar que reciban una compensación adecuada”.

Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), que colabora en la defensa de Alcántara Juan y González Cornelio, existe una “reiterada intención de la Procuraduría General de la República (PGR) de mantener en prisión a ambas mujeres como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de los abusos de los agentes. Máxime si se considera que fueron Teresa y Alberta quienes exigieron que se identificaran cuando

empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente”.

Antes de su detención, las dos mujeres trabajaban en las tierras de sus familias y confeccionaban muñecas de tela para incrementar sus ingresos. Durante el proceso judicial no se les proporcionó intérpretes y el defensor de oficio nunca les explicó sus derechos y medios de defensa.

“Este caso constituye un claro ejemplo de la inexistencia del debido proceso en México, de la ilegal penalización de las expresiones de protesta y de la discriminación que enfrentan las mujeres indígenas ante el sistema de justicia”, dijo Luis Arriaga Valenzuela, director del PRODH.

—Noticias Aliadas.

Activistas asesinados

La policía no ha descartado vínculos entre mina y asesinatos de defensores del medio ambiente.

Entre junio y diciembre del 2009 fueron asesinados en el central departamento salvadoreño de Cabañas tres defensores del medio ambiente muy críticos de la minería metálica. Según denuncian ambientalistas y pobladores de la zona, el móvil de los crímenes pudiera estar relacionado precisamente con su oposición a esa actividad.

Desde que la empresa Pacific Rim El Salvador, subsidiaria de la corporación canadiense Pacific Rim Mining, inició en el 2002 labores de exploración minera en la mina El Dorado, 65 km al noreste de San Salvador, en Cabañas, organizaciones ambientalistas, religiosas y de derechos humanos, así como pobladores de la zona mantienen una campaña constante contra las actividades de la compañía por considerar que la minería metálica acarrea consecuencias negativas para la salud y para el medio ambiente, debido al uso de cianuro en el proceso.

Aunque la empresa no ha suspendido sus operaciones, el permiso de explotación de oro y plata le fue negado por las autoridades en diciembre del 2008, debido precisamente al rechazo que esa industria generaba en la población y que, en medio de una campaña electoral, motivó al entonces presidente Antonio Saca, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a negar tal permiso.

Ante la negativa gubernamental, la compañía inició en diciembre del 2008 un proceso de arbitraje comercial amparándose en las cláusulas del Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana con EEUU (TLCAC+RD), que protegen las inversiones extranjeras. Exige el pago de US\$70 millones en compensación por pérdidas sufridas al haber invertido ese dinero y no obtener el permiso. El arbitraje es administrado en Washington por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), afiliado al Banco Mundial.

Las víctimas

La primera víctima fue Marcelo Rivera Moreno, de 37 años, miembro de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC) y uno de los principales activistas contra las operaciones de la Pacific Rim en la zona. Fue encontrado muerto el 30 de junio del 2009 dentro de un pozo tras permanecer desaparecido durante 12 días.



Pobladores decididos a no permitir minería metálica en su zona.

“En todas las zonas donde la Pacific Rim empezó exploraciones mineras, se generaron niveles de conflicto bastante fuertes”.

— Howard Cotto

Rivera Moreno pertenecía también a la estructura local en San Isidro del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en su momento pidió una exhaustiva investigación del crimen.

En tanto, Ramiro Rivera Gómez (sin parentesco con Rivera Moreno), de 53 años, del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), fue asesinado el 20 de diciembre pasado cuando viajaba en su camioneta por un camino rural del cantón Trinidad, jurisdicción de

Sensuntepeque, Cabañas. Sujetos armados le salieron al paso y le dispararon con fusiles M-16.

Rivera Gómez ya había sufrido un intento de homicidio el 7 de agosto del 2009, por lo cual tenía protección policial. Pero los dos agentes que lo acompañaban fueron superados por el poder de fuego de los fusiles de asalto.

La tercera víctima fue Dora Alicia Sorto, de 32 años, y también integrante del CAC. Fue acribillada el 26 de diciembre, también en Trinidad, cuando venía de lavar ropa de un riachuelo y fue interceptada por sujetos que le dispararon con el mismo tipo de fusil. Sorto tenía ocho meses de embarazo, y resultó herido su hijo de dos años que la acompañaba.

Ambientalistas y pobladores de la zona donde opera la compañía canadiense sostienen que detrás de esos asesinatos se encuentra la transnacional, que estaría recurriendo a una campaña de terror para acallar las denuncias de los ambientalistas, aun cuando probar ese nexo les resulte de momento difícil.

“Esto ya llegó a los extremos, ya tenemos verdaderos mártires ambientales en Cabañas, y yo responsabilizo personalmente a la empresa Pacific Rim de las muertes”, dijo a *Noticias Aliadas* Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiable (CESTA), durante una vigilia celebrada el pasado 8 de enero en el cantón Trinidad en apoyo a los familiares de las víctimas.

“Ellos [Pacific Rim] son los responsables morales. A mí no me consta si el presidente de la compañía ordenó o no los asesinatos, pero sí me consta que ellos han venido aquí a querer sacar el oro y la plata, y son ellos los que han generado todo este clima de violencia”, agregó Navarro, uno de los ambientalistas más destacados del país.

Navarro se refiere al hecho de que desde la llegada de la empresa canadiense se han producido asesinatos y brotes de violencia que no se reportaban en una zona comparativamente más tranquila que el resto del país, que vive una ola criminal de larga data. La cifra de homicidios de El Salvador alcanza los 52 por cada 100,000 habitantes, según datos policiales.

Móviles del crimen

Inicialmente, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) consideraron que el móvil de los asesinatos pudo provenir de pleitos familiares en que habrían estado involucradas las víctimas. Esa versión es rechazada por ambientalistas que piensan que es un intento para desvincular los crímenes con la que debería ser la principal línea de investigación: la Pacific Rim.

No obstante, el subdirector de Operaciones de la PNC, Howard Cotto, aseguró a *Noticias Aliadas* que la Policía está abierta a todas las hipótesis, y no descarta ninguna línea de investigación, incluyendo la que apunte a la compañía canadiense.

“Si bien no podemos plantear en este momento que el móvil de todos los crímenes tenga que ver con la minería, ni que no tenga que ver, lo que sí es claro es que en todas las zonas donde la Pacific Rim empezó exploraciones mineras, se generaron niveles de conflicto bastante fuertes”, señaló Cotto. “Pero no es correcto que nosotros, como institución, nos pronunciemos a favor de una posición u otra si no tenemos las pruebas todavía”.

El presidente de Pacific Rim, Tom Shrake, en una entrevista telefónica concedida el 6 de enero pasado a Jesse Freeston, periodista del informativo por Internet *The Real News Network*, negó cualquier vínculo entre los críme-

nes con la compañía que preside.

“Existe una lluvia continua de declaraciones que conectan estos asesinatos con Pacific Rim, y no existe absolutamente ninguna prueba, pero las declaraciones continúan”, afirmó.

“Yo no creo que las muertes en el área de Trinidad tengan que ver con la minería”, acotó. “Esa gente ya había tenido sus pleitos desde mucho antes de que llegáramos nosotros”.

La fiebre del oro

El libro “El lado oscuro del oro, impacto de la minería en El Salvador”, escrito por Florian Erzinger, Luis González y Ángel M. Ibarra, y publicado en diciembre del 2008, señala que América Central está padeciendo una “nueva fiebre del oro” con la excepcional subida de hasta los \$1,000 por onza de oro.

En el caso salvadoreño, alrededor de 29 proyectos de exploración minera se han aprobado desde el 2006, y de esos, 25 pretendían iniciar labores de extracción a cargo de 11 empresas mineras transnacionales. Pero los proyectos han quedado en suspenso a partir de la negativa oficial dada a Pacific Rim.

El nuevo gobierno de Mauricio Funes, que llegó al poder el 1 de junio pasado de la mano del izquierdista FMLN, tampoco está dispuesto a otorgar tales permisos.

El total de onzas de oro a extraer en esos 25 proyectos mineros alcanzaría los 12 millones, más 78 millones de onzas de plata, según el libro. En el proceso se utilizarían hasta 160 millones de litros de agua, y se aplicarían unas 950 TM de cianuro, un tóxico mortal.

La Pacific Rim extraería de la mina El Dorado 1.4 millones de onzas de oro, señalan los autores del libro, y calculan las ganancias totales que en conjunto generarían los 25 proyectos: \$10 millardos. □

MÉXICO

Activistas indígenas en riesgo

AI demanda protección a defensores de derechos humanos en zonas rurales.

Amnistía Internacional (AI) ha demandado al gobierno mexicano brinde protección a activistas de derechos humanos, particularmente a aquellos que luchan por los derechos indígenas, señalando amenazas y

violencia que obstaculizan su trabajo.

El informe “Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México”, de AI, dado a conocer el 21 de enero, detalla 15 casos de activistas mexicanos que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas, o han sido encarcelados bajo cargos falsos entre el 2007 y el 2009 para impedirles que realicen su labor.

“Defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el pro-

blema”, dijo Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre defensores de los derechos humanos de AI. “Cuando se ataca, amenaza o mata a un defensor o defensora de los derechos humanos, se envía un peligroso mensaje a muchos otros y se niega la esperanza a todas las personas en cuyo favor trabaja este defensor”.

El documento incluyó el caso de Otilia Eugenio Manuel, de 32 años, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) en el sureño estado de Guerrero, quien ha sido víctima de numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998 cuando comenzó a organizar a las comunidades indígenas.

Otra víctima es Jesús Emiliano, de 42 años, integrante del Frente Demo-

crático Campesino de Chihuahua, en el norte del país, organización que defiende los derechos económicos de los agricultores sin recursos. Emiliano fue detenido en el 2007 acusado de sabotaje, cargo que fue desestimado por un juez federal señalando falta de evidencias, indicó AI.

“El juez que desestimó el caso era consciente de dichas irregularidades, pero no se ha emprendido ninguna acción contra las autoridades federales por arresto indebido”, dice el informe.

Tapias exigió al gobierno “desarrollar urgentemente un programa eficaz e integral de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos”.

—Noticias Aliadas.

Políticas ambientales se hacen esperar

En muchas áreas aún predomina el modelo extractivo de gobiernos anteriores.

Bolivia avanza, Evo no se cansa” era una de las máximas de la campaña que llevó al presidente Evo Morales a la reelección en diciembre pasado. Pero los aspectos socioambientales de los avances políticos, económicos y sociales que se han producido desde el 2006, cuando Morales llegó al poder, son ahora complejos desafíos para una sociedad que vive cambios vertiginosos e inéditos en su historia.

La dinámica de las extracciones de petróleo y gas, las perspectivas de producir hierro y litio, el peligro de los transgénicos, el impacto de megaproyectos regionales de infraestructura, el acceso al agua, los focos de contaminación endémica, las consecuencias de la vieja y nueva minería, el plan de industrialización, son una realidad inquietante que ya genera reacciones en comunidades campesinas e indígenas.

En el marco de la crisis global (ambiental, energética y alimentaria), la evolución de estos conflictos atrae la atención de manera particular: ¿logrará Bolivia soluciones que puedan ser tomadas como ejemplos superadores, o sufrirá la repetición del esquema que actualmente devasta el planeta?

“Hemos cambiado el discurso, pero no todavía el modelo”, dispara tajante Marco Ribera Arismendi, activista con casi 30 años de experiencia en el campo ambiental latinoamericano, integrante de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), una de las mayores organizaciones ecologistas del país. Desde el 2007, la LIDEMA realiza un amplio trabajo de diagnóstico y seguimiento de las problemáticas socioambientales centrales, que en general “responden a un modelo de desarrollo global o continental, que excede a Bolivia”.

“Teníamos grandes esperanzas en este gobierno en relación a la solución o cambio en estos temas, y se mantienen todavía las esperanzas, pero en una escala de puntaje máximo 10, si los gobiernos neoliberales estaban desaprobados con 1 o 2, ahora estamos apenas en 3 o 4, cuando la expectativa era estar ya en 6 o 7”, dice Ribera Arismendi.

Poco espacio para las críticas

En estos días crecen los llamados de atención desde distintos sectores. Varios dirigentes de la Confederación de Naciones Aymaras y Quechuas (CONAMAQ) aprovecharon la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra



Modelo extractivista generador de ingresos sigue imponiéndose sobre criterios socioambientales.

JUANNICASTRO

“He hablado con indígenas que me han dicho ‘nos están sacando el gas y nos están prometiéndome casas. Pero nosotros queremos recompensa por lo que nos están sacando, queremos tierras’”.

— William Ávalos

América (ALBA) realizada en Cochabamba en octubre del 2009, para expresar que “los megaproyectos no son compatibles con el Buen Vivir”, cosmovisión indígena que implica vivir en armonía con la naturaleza.

El terreno no está demasiado fértil para las críticas y opiniones. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, sus advertencias son tomadas a veces como ataques opositores al gobierno. Y cuando provienen de organizaciones de pueblos originarios, algunos las adjudican a disputas por poder cuando en realidad están en juego importantes impactos a los ecosistemas.

En este sentido, el avance institucional en la implementación de las autonomías indígenas —establecidas por la nueva Constitución— en amplios territorios generará un cambio de escenario que podría favorecer la preservación de floras y faunas. Así lo espera Jenny Gruenberger, directora de LIDEMA, para quien “la defensa de la diversidad cultural lleva consigo la defensa de la diversidad biológica”.

Gruenberger opina que las críticas deben hacerse de forma constructiva y participando en el proceso de cambio. “Así logramos trabajar en todos los capítulos ambientales de la nueva Constitución, y varias de nuestras propuestas quedaron firmes”, dice.

Agrega que “es muy valioso que nuestro presidente tenga un fuerte discurso ecológico y de integración con la tierra.

Pero la realidad dentro del país todavía no está a la altura de ese discurso. Quizá porque supuestamente hay otras prioridades. Pero lo que nosotros decimos es que si no se toman recaudos ya mismo, en breve será demasiado tarde”.

Desde la sureña Tarija, el educador popular William Ávalos opina que el mandatario “a través de la llamada revolución cultural, que incluye un discurso que rescata las tradiciones y valores ancestrales, está haciendo mucho hincapié en la cosmovisión andina, donde se manifiesta que no somos materia, que somos energía, y que esa energía tiene que estar en equilibrio con su entorno, con la naturaleza. Eso es profundo, es bien profundo, y te ayuda a saber dar y a saber recibir, a dar energía y recibir energía. Pero solamente como discurso eso está planteado, en la práctica todavía hay muchos problemas. Por ejemplo, en el país el sostén económico es el gas, y seguimos sacando gas, y yo diría que están dañando. He hablado con indígenas que me han dicho “nos están sacando el gas y nos están prometiendo casas. Pero nosotros queremos recompensa por lo que nos están sacando, queremos tierras”.

Ávalos reflexiona que la conciencia ecológica en Bolivia está creciendo, pero no tanto en la llamada “media luna”, que incluye a los departamentos orientales de Santa Cruz, Beni y Pando y el sureño Tarija, con mayores recursos económicos y riquezas naturales.

“Aquí el discurso de Evo no llega a operarse. En Tarija, Caraparí, capital del gas, debía ser una ciudad modelo, con servicios, escuelas, hospitales, etcétera. Eso ha dicho Evo. Pero tú pasas por Caraparí, y nada de eso. Una polvareda, y siguen extrayendo y extrayendo gas. Entonces, yo no sé si la visión ecológica en ese marco se opera. Además, esa cosmovisión indígena es andina, y los pueblos de aquí, de la media luna, no son andinos. Son similares, sí. Quieren cuidar su tierra, su cultura, sus productos, su lengua. Pero no son lo mismo”.

Sin cambios en minería e hidrocarburos

En cuanto al tema minero, los cambios se siguen haciendo esperar. La nacionalización del sector, implementada en el 2006, ha tenido pocos avances; ni siquiera se ha modificado el monto de regalías que deben pagar las empresas extranjeras por sus

extracciones —se mantiene en torno al 5%, igual que en la mayoría de los países de América Latina— y el crecimiento de la megaminería a cielo abierto no encuentra freno, a pesar de las negativas consecuencias socioambientales observables no sólo en Bolivia sino en el resto de la región.

Hidrocarburos es otro gran tema. Las consecuencias de la explotación de petróleo y gas están a la vista, sobre todo en el sur del país, con grandes pasivos ambientales. Empero, el gobierno anuncia más extracciones ante la falta de fondos para cubrir las necesidades sociales y combatir la pobreza.

Hugo del Granado, por 15 años y hasta hace pocos meses ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB), se muestra sin embargo más preocupado por los aspectos económicos, criticando fuertemente a su propio gobierno por no avanzar más rápidamente en la industrialización del sector.

“Falta inversión en infraestructura”, afirma. “La renta petrolera ha crecido por el incremento de los precios internacionales y no por el aumento de la producción nacional. Del neoliberalismo nos hemos pasado al otro extremo, a un estatismo paralizante y monopolístico”.

Pide gastar menos en bonos sociales “que son uno de los sumideros de las ganancias”, en referencia a los subsidios entregados a escolares, personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Indica que falta seguridad jurídica “ya que desde el 2005 han cambiado cuatro veces las reglas del juego y nadie va a venir a invertir así”. Pide mayor convivencia con el sector privado porque “no tenemos la capacidad para las enormes inversiones que necesitamos ni tenemos la tecnología para estar a la cabeza de los cambios”. Finalmente, opina que hay que “ver hacia dónde va el mundo para no ir en contracorriente”.

Estas declaraciones no sorprenden a Ribera Arismendi, quien remarca que “lo socioambiental no le importa mucho al área hidrocarburos del gobierno; tiene la misma visión que antes de Evo”.

Para Hervé Do Alto, politólogo francés radicado en Bolivia, el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) “tiene muchos problemas para renovar los equipos humanos de las distintas áreas, y más en las técnicas. Al faltar gente capacitada, se mantienen funcionarios de gobiernos anteriores, con visiones incluso contrarias al gobierno”. □

COSTA RICA

Leslie Josephs desde Playa Grande

Políticas ambientales en retroceso

Gobierno intenta degradar parque nacional para evitar pagar millones por expropiación de terrenos.

A lo largo de la costa del Pacífico de Costa Rica hay miles de casas, hoteles y condominios, que forman parte del auge inmobiliario de los 90, fuertemente alimentado por extranjeros adinerados que buscaban escapar de los helados in-

viernos del hemisferio Norte.

Pero en Playa Grande, una franja de arena blanca que es el último lugar de desove importante en el Pacífico oriental para las tortugas baula, que se encuentran en peligro de extinción, ese auge no las ha afectado. Hoy día.

El gobierno saliente del presidente Oscar Arias ha presentado a la Asamblea Legislativa una reforma que abriría la zona al desarrollo inmobiliario que ya ha invadido parte de la costa, poniendo en peligro a las ya amenazadas tortugas.

El Parque Nacional Marino Las Baulas fue creado en 1991 en un esfuerzo por proteger las especies cuyas poblaciones anidadoras habían sufrido una rápida reducción en los años anteriores.

El parque considera como área protegida una franja de 125 m calculada desde el punto promedio de la marea alta. Las pocas casas construidas a lo largo de la costa necesitan usar luces verdes y rojas especialmente diseñadas durante la noche para no molestar a las tortugas mientras están desovando. El año pasado, el gobierno de Arias propuso reducir el nivel del parque a refugio, lo cual permitiría proteger sólo 75 m de arena, con lo cual propietarios dentro del parque podrían continuar con



Urge mantener protegido último lugar de desove importante para las tortugas baula en el Pacífico oriental.

“Ahora las tortugas baula que tenemos anidando son las que empezamos a proteger hace 15 años”. — Randall Arauz

sus estancados proyectos inmobiliarios y ahorrar al gobierno cientos de millones de dólares en pagos por expropiación.

Problema doble

Sin embargo, a pesar de casi dos décadas de esfuerzos de protección en el parque nacional, las poblaciones de tortugas baula continúan reduciéndose, en gran parte debido a la pesca con palangre y por embarcaciones con redes agalleras que atrapan a las tortugas durante su temporada de migración, cerca de las costas del Perú y Chile, naciones con inmensas industrias pesqueras.

“Hace siete u ocho años contábamos 100 tortugas por noche”, dijo el guardaparques Danilo Campos. “El año pasado sólo 28 llegaron en todo el año”.

Si se suma el potencial desarrollo inmobiliario a lo largo de la playa, los resultados podrían ser desastrosos.

Según Randall Arauz, fundador y director del no gubernamental Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRÉTOMA), proteger las tortugas en suelo costarricense es más fácil que detener la pesca con palangre y las embarcaciones agalleras en las aguas del Pacífico sur y oriental, que han convertido el tema en un problema internacional.

“Lo que los pescadores atrapan con esos palangres son hembras reproductoras”, afirmó Arauz. “Costa Rica no tiene nada que ver con esta mortalidad adulta. Todas esas embarcaciones con palangres están llegando en busca de aletas de tiburón”.

Las tortugas baula anidan entre México y Costa Rica desde noviembre hasta alrededor de febrero o marzo. Arauz señaló que las playas de Nicaragua y México, así como otras en Costa Rica, han visto reducir sus poblaciones, y gracias a más de 20 años de protección, Playa Grande se ha convertido en el único lugar que

queda para el desove de estas tortugas en la región.

“¿Y por qué ocurre eso? Ahora las tortugas baula que tenemos anidando son las que empezamos a proteger hace 15 años”, dijo.

Políticas contradictorias

Costa Rica, que es conocida por tener las políticas ambientales más estrictas del continente, ahora está buscando relajar sus leyes.

En los últimos 15 años, fueron vendidos lotes detrás de las playas de anidación, dentro de los límites del parque nacional. Para mantener el parque, el gobierno tendría que compensar a los propietarios de estos lotes.

El año pasado, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones presentó una ley para retirar la categoría de parque nacional a Las Baulas y reducir el área protegida en casi dos tercios.

“Si se hubieran permitido esos proyectos inmobiliarios en los 90, esas tortugas que estamos protegiendo ahora no tendrían lugar para anidar”, dijo Arauz. “Debemos detener esos proyectos”.

Algunos propietarios que compraron terrenos hace 15 años ya han construido casas. Uno de ellos dijo que sólo estaba esperando colocar las ventanas.

Pero si la ley para degradar el parque no es aprobada por la Asamblea Legislativa, de 57 escaños, antes que termine el mandato legislativo el 30 de abril, el gobierno tendrá que expropiar las casas y pagar a los propietarios, aunque hayan construido en un parque nacional.

“Hay por lo menos 40 propietarios. Se vendieron terrenos a gente que pensó ‘qué maravillosa playa. ¿Cuánto cuesta? Mucho más barato que en California. ¿Y ahora me estás diciendo que es un parque nacional y no puedo construir?’”, comentó.

Arauz dijo que los compradores o fueron estafados y nadie dijo que la propiedad estaba dentro de un parque nacional, o fueron advertidos pero no hicieron caso.

“No vamos a permitir que se salgan con la suya”, manifestó.

Las principales organizaciones ambientales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Conservación Internacional, Oceanía y Nature Conservancy, han dado todo su apoyo para mantener Las Baulas como parque nacional.

A principios de marzo, la Contraloría General de Costa Rica publicó un informe en que criticó duramente al Ministerio del Ambiente por el “débil” manejo del parque.

Dijo que la ley se presentó debido a “lo inmanejable de la situación” en el parque, y sólo para evitar pagar por los terrenos, cuyo valor, dicen los propietarios, ha aumentado desde que los compraron.

“Pero el problema y las amenazas al hábitat de las tortugas seguiría latente con el paso de los años, lo que podría ser ambientalmente irreversible”, precisó el informe.

Si la ley de degradación no es aprobada, el gobierno tendría que pagar unos US\$ 500 millones.

“Pero si el parque es degradado, al día siguiente etablaríamos un juicio”, aseguró Arauz. □

“El glifosato mata la pachamama”

Rodolfo Páramo es médico pediatra radicado en el norte de la céntrica provincia de Santa Fe. Jubilado de su profesión, sigue activo en la difusión de los efectos del glifosato, el herbicida fabricado por la transnacional estadounidense Monsanto, utilizado para fumigar las plantaciones de soja transgénica que en Argentina cubren ya una superficie de más de 17 millones de hectáreas.

Junto a integrantes de diversos grupos de vecinos que intentan frenar las fumigaciones en sus pueblos, Páramo recorre el país dando charlas y conferencias o participando en encuentros sobre el tema. A mediados de marzo se dio a conocer un fallo dictado en diciembre por la Justicia de Santa Fe que prohíbe las fumigaciones con glifosato a menos de 800 metros de viviendas familiares.

Juan Nicastro, colaborador de NOTICIAS ALIADAS, dialogó con Páramo en el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, provincia de Córdoba, realizado del 20 al 31 de enero, ámbito elegido para una nueva campaña de concientización sobre el daño a la salud que producen los agrotóxicos.

¿Cómo descubrió los efectos de los herbicidas?

Luego de siete años de trabajo en el servicio de neonatología del Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe, me trasladé a la localidad de Mal Abrigo, en el norte de la provincia, donde me dediqué a clínica pediátrica. Allá por los años 1994 y 1995, comenzamos a ver nacimientos con malformaciones, sobre todo del neuroeje, desde el cerebro hasta la columna vertebral. A nivel cerebral, anencefalia, es decir, falta de cerebro. Y a nivel de la columna vertebral, falta de cerramiento en algunos lugares, principalmente a nivel cervical y lumbo-sacro, quedando la médula expuesta al exterior.

Mal Abrigo tiene unos 10,000 habitantes y de 15 a 20 partos por mes. En un año tuvimos 12 niños nacidos por malformaciones, una tasa altísima. En Santa Fe teníamos lo normal: un caso de malformación congénita cada 8,500 a 10,000 nacimientos vivos. En Mal Abrigo la cifra era de terror. Comenzamos a investigar. Yo planteaba que había en el ambiente una sustancia que inhibía al ácido fólico, que es el protector para evitar las malformaciones en el sistema nervioso. Esto me llevó a averiguar qué producto se estaba utilizando en el campo.

Corrían los años 1994, 1995. Recién en enero de 1996, Felipe Solá, subsecretario de Agricultura del gobierno del ex presidente Carlos Menem [1989-99], autorizó formalmente la siembra de soja transgénica RR Roundup Ready, resistente al herbicida Roundup, el glifosato de Monsanto. Pero observen que [la transnacional suiza] Syngenta venía vendiendo en la zona la soja de Monsanto, antes de la autorización nacional, de contrabando, y utilizaba el Roundup.

Yo seguía investigando, hablaba con ingenieros agrónomos, en una época en que las arañas —o mosquitos, como les llaman en otros lugares [vehículo cuyo diseño lo asemeja a una gran araña o insecto]— terminaban de fumigar en el campo y entraban chorreando los productos químicos por las calles del pueblo. Eso en muchos lugares sigue ocurriendo. Otras localidades, como en este caso el gobierno de Mal Abrigo, prohibieron el acopio y la introducción o circulación de los mosquitos o arañas dentro del perímetro urbano del pueblo. Y como por

arte de magia, empezaron a disminuir las malformaciones en los recién nacidos.

Pero comenzaron a resaltarse los casos de cáncer, sobre todo en personas jóvenes, que no respondían a los tratamientos anticancerosos habituales, y de rápida evolución.

¿Hay antecedentes de efectos nocivos en otros lugares del mundo?

Muchos. Recordemos que hace más de 20 años, en Bophal, India, por mal manejo de los empleados de la [transnacional estadounidense] Union Carbide, un químico que estaban produciendo se desparramó en el ambiente y en menos de 10 minutos hubo 20,000 muertos, y actualmente se siguen sufriendo secuelas.

Al principio, a mí me consideraban loco, el que venía a molestar. Cerca del 2000 logramos que un juez, con sentencia judicial, con elementos científicos, sacara los silos de cereales del centro de Mal Abrigo, demostrando que en el ámbito urbano son desastrosos para la comunidad. Mientras yo trabajaba en la ciudad de Santa Fe, no vi la cantidad de chicos con problemas respiratorios que vi en Mal Abrigo. Allí había polución ambiental, porque ventean los cereales para sacarlos, pero al mismo tiempo están sacando al aire sustancias que están en la cobertura de esa semilla. El herbicida está.

La Universidad Nacional del Litoral [en Santa Fe] desde el año 1997 venía haciendo un estudio, publicado el año pasado, que demostró que hay concentraciones de glifosato en el grano verde y en el grano maduro de la soja. Y que el glifosato pasa a todo lo que sea acuoso. Además, cuando se estudió el aceite de soja, se encontraron residuos del insecticida endosulfan, altamente tóxico; tal es así que a partir de

este año la transnacional alemana Bayer lo retirará de la venta en Argentina.

¿El glifosato mata todo menos la soja?

Casi todo. En EEUU tuvieron que abandonar campos, unas 5,000 Ha, porque apareció lo que consideraron una nueva maleza, maldita para ellos, bendita para nosotros, el amaranto, cereal que es la base nutricional de los pueblos originarios de la América andina para mantenerse fuertes y sanos. Y no pueden destruirla con ningún herbicida. El nuevo enemigo de Monsanto es el amaranto.

¿Cuál cree que es el modo más eficaz de enfrentar esta situación?

Que la gente tome conciencia. Hay muchísimos productos hechos con esta soja, cada vez más. Yo estudié en una universidad pública, y tengo la obligación de devolver a la sociedad lo que la sociedad me dio a través de esa enseñanza gratuita que recibí. Mi educación la pagó la gente. Y si yo, como profesional, veo que hay algo que es ignorado pero que está matando gente, tengo que reaccionar, estudiar y difundir. Y el glifosato no mata sólo la vida humana, mata las bacterias y los hongos de la tierra. Mata la pachamama. Y no me lo contaron, lo viví. □



JUAN NICASTRO

“El nuevo enemigo de Monsanto es el amaranto”.

— Rodolfo Páramo



Puerto Nuevo (Ecuador), en el río San Miguel; al frente, Teteyé (Colombia), donde inicia el camino que conduce a Puerto Asís, lugar en el que en enero se reunieron comunidades de la frontera binacional.

LUIS ÁNGEL SAAVEDRA

COLOMBIA/ECUADOR

Luis Ángel Saavedra desde Quito

Frontera sin Estado

Lugareños enfrentan atropellos de militares de ambos países.

Mientras los gobiernos de Colombia y Ecuador afirman que se están superando las dificultades que provocaron la ruptura de sus relaciones diplomáticas desde marzo del 2008, a raíz del ataque perpetrado por militares colombianos a un campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, en la frontera no hay elementos que permitan asegurar lo mismo, pues persisten las incursiones militares, el sicariato, el asesinato de civiles y los controles que impiden a la población fronteriza alimentarse.

Después de la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), realizada en Quito el pasado 9 de febrero, el canciller colombiano Jaime Bermúdez Merizalde afirmó que “se han superado las dificultades con Ecuador”. Días antes, el propio presidente colombiano Álvaro Uribe había dado muestras de acercarse al mandatario ecuatoriano Rafael Correa, al agradecer su colaboración en la lucha contra las FARC.

“Quiero agradecer al gobierno ecuatoriano el esfuerzo que ha hecho recientemente en el área de frontera neutralizando unos terroristas de las FARC”, dijo Uribe refiriéndose a una acción militar ecuatoriana ocurrida el 18 de enero, en la que fueron abatidas tres personas.

Correa, por su parte, afirmó que “nuestros soldados pudieron defenderse y las tres bajas son por parte de las FARC; antes hubieran sido bajas en nuestros soldados”.

No obstante, campesinos de la Cooperativa Agrícola “Fuerzas Unidas” y de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo de Sucumbíos (FORCCOFES), ambas

de Ecuador, desmintieron a los dos presidentes y aseguraron que los tres muertos eran campesinos, dos colombianos y uno ecuatoriano, que se desplazaban por el río Opuno, cerca a la frontera colombo-ecuatoriana, llevando víveres a Puerto Mestanza, Ecuador, y que fueron acribillados por el Ejército ecuatoriano.

“Los señores Orlando Tapia Molano, Sabrino Pérez y Francis Tamayo eran campesinos conocidos por todos nosotros. El señor Tamayo era un comerciante de Puerto Mestanza”, asegura Calito Párraga, presidente de la cooperativa Fuerzas Unidas.

La versión de Párraga es corroborada por el fiscal de la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos, Felipe Villota, quien hizo el levantamiento de los cadáveres y dijo que no encontró uniformes militares o armas en los cuerpos de los abatidos.

“Yo tengo las pruebas de que no estaban armados, ni tenían uniformes militares. Se trata de una persona de nacionalidad ecuatoriana [Francis Tamayo], oriunda de Loja y que se dedicaba al comercio en Puerto Mestanza. La gente está muy indignada, denuncian los atropellos y malos tratos de las tropas militares y afirma que presenciaron los disparos. Vieron a quienes lo hicieron”, dijo Villota.

En este caso hay por lo menos 15 testigos que observaron lo ocurrido, por lo que FORCCOFES decidió denunciar éste y otros hechos que se dan en la zona fronteriza de Sucumbíos, en donde los Estados sólo existen con acciones de represión militar.

Según FORCCOFES, desde agosto del 2009 se han producido 14 incidentes en los que se involucra a patrullas militares ecuatorianas y a paramilitares colombianos, siendo el más grave el asesinato de Miguel Lapo y Miguel Pinzón, líderes de las comunidades ecuatorianas de Bermeja y San Martín, a manos de paramilitares colombianos el 28 de setiembre del 2009.

Acciones conjuntas de amedrentamiento

FORCCOFES ha denunciado además las incursiones de la Marina del Ecuador en la cooperativa Fuerzas Unidas para amedrentar a familias de refugiados colombianos y a los dirigentes comunales, como los casos de Wilson Ernesto Chapid, cuya casa fue desvalijada el 7 de agosto del año pasado por una patrulla de unos 40 militares ecuatorianos, y de Claudia María Palma, quien fue golpeada junto a su hija de 15 años y un trabajador de su finca, por una patrulla de la Marina ecuatoriana, el 15 de agosto, al defender a uno de sus trabajadores de la finca que estaba siendo agredido por los militares.

Las comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana aprovecharon una reunión binacional de autoridades locales de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos y el departamento colombiano de Putumayo, celebrada en Puerto Asís, Colombia, el pasado 29 de enero, para dar a conocer su realidad. Señalan que “mientras las autoridades locales buscan la integración fronteriza, basada en el comercio de las grandes empresas, la apertura de rutas terrestres, fluviales y aéreas, y las autoridades nacionales desean restablecer las relaciones diplomáticas, las comunidades de frontera son ajenas a estos acuerdos y deben sobrevivir en una zona donde, prácticamente, ninguno de los dos Estados desea la paz”.

“mientras las autoridades locales buscan la integración fronteriza, basada en el comercio de las grandes empresas, la apertura de rutas terrestres, fluviales y aéreas, y las autoridades nacionales desean restablecer las relaciones diplomáticas, las comunidades de frontera son ajenas a estos acuerdos y deben sobrevivir en una zona donde, prácticamente, ninguno de los dos Estados desea la paz”.

¿Condenados al hambre?

Para las comunidades fronterizas, incluso los acuerdos firmados por los dos Estados pueden ser causa de represión. Por ejemplo, el artículo 30 del Decreto 1047 de 1994 firmado por los dos gobiernos, que regula las relaciones fronterizas entre Ecuador y Colombia, establece que la población de frontera podrá adquirir víveres por un valor aproximado de US\$700

mensuales en cualquier lado de la frontera y trasladarlos al otro lado. La población que hace uso de esta facultad corre el riesgo de ser interceptada por las Fuerzas Armadas de cualquiera de los países, quienes les decomisan los víveres aduciendo que son productos para aprovisionar a las FARC.

Ante el temor del decomiso de los víveres, las embarcaciones tratan de evitar el encuentro con los militares, pues saben que las patrullas no dudan en disparar antes de preguntar cualquier cosa, como lo ocurrido el 18 de enero.

La necesidad de aprovisionamiento de víveres en una región en la que no se produce nada, ya que el suelo fue devastado por las fumigaciones de glifosato a los cultivos de coca en el lado colombiano, ha llevado a sus habitantes a protestar contra los controles y anunciar levantamientos, como el caso de Puerto Leguízamo (Colombia), sobre el río Putumayo, en la frontera entre Colombia y Perú.

Puerto Leguízamo debió soportar tres meses de paro armado a finales del año pasado, decretado por las FARC, lo que impidió que se pudiese abastecer por el río Putumayo. Además, enfrenta una sequía en los últimos dos meses que ha provocado que el río Putumayo pierda el caudal y no sea navegable; por lo tanto no se pueden hacer los viajes de seis horas entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo con los que se aprovisionaba a la ciudad.

Las autoridades de Puerto Leguízamo llegaron al encuentro de Puerto Asís con una sola consigna: pedir que se les permita,

basados en el Decreto 1047, aprovisionarse de víveres en Puerto El Carmen, Ecuador, a dos horas de viaje por el río San Miguel, y así evitar la hambruna que se cierne sobre esta ciudad. La respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) fue negativa.

“No se entiende esa actitud”, manifestó el diputado colombiano por el departamento de Putumayo, Eúler Guerrero. “No se entiende cómo habiendo incluso las normas, se niega a una ciudad su derecho a comer”.

Es indudable que en esta región la lucha contra las FARC, en la que ya está involucrado el Ecuador, se sobrepone al derecho que tienen las comunidades de alimentarse y sobrevivir, al respecto a la propiedad privada, pues los militares desvalijan a los campesinos, y al proceso de integración comercial, pues el comercio en los ríos Putumayo y San Miguel se sanciona con la muerte, tal como debieron entenderlo los tres acribillados del río Opuno.

La pregunta que cabe es por qué el gobierno ecuatoriano no admite estas denuncias pese a que se las han enviado oportunamente al ministro de Defensa, Javier Ponce, o si la realidad es como afirma uno de los motoristas del río Putumayo: “el Ejército ecuatoriano todavía responde a los EEUU; ellos financian a todos los militares que se mueven por estos ríos, y esas acciones son acciones paralelas que tienen un nombre: son acciones paramilitares”. □

CUBA

Muerte de un disidente

Tras 85 días en huelga de hambre, fallece preso político.

Duras críticas ha recibido el gobierno cubano por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos luego del fallecimiento el 23 de febrero del disidente Orlando Zapata Tamayo, de 42 años, a consecuencia de una huelga de hambre emprendida casi tres meses atrás.

Zapata Tamayo fue detenido el 20 de marzo del 2003 durante el operativo conocido como “Primavera Negra” en el que fueron arrestados 75 opositores al gobierno. Tras juicios sumarios, los disidentes fueron sentenciados a penas de entre 14 y 30 años de cárcel acusados de “atentar contra la independencia y economía de Cuba”.

Según Amnistía Internacional (AI), Zapata Tamayo había recibido en el 2004 una sentencia inicial de tres años de cárcel, pero posteriormente fue sometido a varios juicios por cargos adicionales de “desobediencia” y “desórdenes en establecimientos pe-

nitenciarios”, el último en mayo del 2009. Al momento de su muerte cumplía una condena total de 36 años de prisión.

El opositor inició su más reciente medida de fuerza el 3 de diciembre del 2009 demandando que el gobierno lo reconociera como preso de conciencia, tal como lo había catalogado AI, y en protesta por los maltratos recibidos durante su reclusión. Su muerte se produjo en el Hospital Hermanos Armeijeras, en La Habana, donde fue trasladado a mediados de febrero para intentar salvarle la vida.

El presidente Raúl Castro lamentó la muerte de Zapata Tamayo a pesar de los esfuerzos de los médicos, y negó que hubiera sido torturado.

La madre de Zapata Tamayo, Reina Luisa Tamayo, rechazó las condolencias de Castro y calificó la muerte de su hijo de “asesinato premeditado”.

“Mi hijo perdió la vida, fue un asesinato premeditado. Mi hijo ha sido torturado en todo el tiempo que ha estado por las prisiones, ha sido objeto de sufrimiento para esta familia”, dijo Tamayo en una grabación difundida por el blog Generación Y.

Tras conocerse la muerte de Zapata Tamayo, cuatro presos políticos y un periodista opositor iniciaron huelgas de hambre, informó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), dirigida por el disidente Elizardo Sánchez. Los reclusos Diosdado González Marrero,

Eduardo Díaz Freitas, Fidel Suárez Cruz y Nelson Molinet, así como el periodista Guillermo Fariñas manifestaron que el objetivo de su medida de fuerza es la liberación inmediata de 26 presos políticos cuya salud se encuentra seriamente deteriorada.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) manifestaron su “conmoción” por la muerte de Zapata Tamayo y expresaron “su grave preocupación” por la situación de los opositores que continúan encarcelados.

AI, en un comunicado dado a conocer el 24 de febrero, demandó que se lleve a cabo “una investigación completa para determinar si en su muerte [de Zapata Tamayo] pueden haber intervenido malos tratos” e instó al gobierno cubano “a liberar inmediata e incondicionalmente a todos los prisioneros de conciencia”.

“La trágica muerte de Orlando Zapata Tamayo es un terrible ejemplo de la desesperación a la que se enfrentan los presos y presas de conciencia que no albergan esperanzas de ser liberados de su injusto y prolongado encarcelamiento”, manifestó Gerardo Ducos, investigador de AI sobre el Caribe.

Según AI, existen unos 200 disidentes presos en cárceles cubanas, de los cuales 54 son considerados presos de conciencia.

—Noticias Aliadas.

PERÚ

Polémico informe sobre Bagua

Representantes indígenas rechazan versión oficial de sangrientos enfrentamientos en la Amazonia.

Una comisión nombrada por el gobierno no restó responsabilidad del Ejecutivo por los sangrientos enfrentamientos entre policías y manifestantes indígenas en la ciudad nororiental de Bagua el 5 de junio del 2009, que dejaron 33 muertos (10 indígenas y 23 policías).

El 12 de enero fue presentado públicamente el informe elaborado por el Grupo de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, creado por el gobierno peruano tras los enfrentamientos en Bagua.

El grupo, integrado por ocho ministros, presidentes de regiones amazónicas y representantes indígenas, se dividió en cuatro mesas que investigaron los sucesos del 5 de junio, los decretos leyes contra los que se levantaron los amazónicos, el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y el plan de desarrollo de la Amazonia.

El informe elaborado por la mesa 1 —conformada por las ex ministras Susana Pinilla y Pilar Mazzetti, el sociólogo Manuel Bernales, el sacerdote dominico Ricardo Álvarez Lobo, la religiosa misionera Maricarmen Gómez y el indígena awajún Jesús Manacés, quien la presidía— que buscaba esclarecer los hechos de violencia, sus causas y sus consecuencias y dar recomendaciones, fue rechazado por los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), que agrupan a la mayoría de comunidades nativas de la Amazonia peruana, porque no toman en cuenta la versión de los indígenas.

En opinión del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), el documento de la mesa 1 brinda “una visión totalmente parcializada, politizada e ideologizada” de los hechos, motivo por el cual no fue suscrito por Manacés ni Gómez.

De hecho, el informe sólo responsabiliza al Ejecutivo por “apresuramiento y falta de tacto” al promulgar los decretos sin respetar “la delicada sensibilidad amazónica sobre los temas territoriales y de consulta”, pero atribuye los hechos de violencia a integrantes del opositor Partido Nacionalista, ronderos, maestros, reservistas del Ejército y frentes de defensa, “quienes sumándose a las justas reivindicaciones amazónicas contribuyeron a exacerbar los ánimos violentos y el espíritu combativo de los indígenas en defensa de su territorio”.

Igualmente sostiene que “el movimiento indígena fue desbordado por su propio colectivo,

no pudiendo controlar los excesos que desencadenaron en violencia y muerte” y señala “la irresponsabilidad de los informantes que magnificaron y falsearon los acontecimientos de la Curva del Diablo [lugar donde se produjeron algunas de las muertes], generando reacciones vengativas”.

Entre las recomendaciones de las mesas 2, 3 y 4 se incluyen mejorar la legislación forestal y prohibir el cambio de uso de bosques y áreas protegidas para evitar otras actividades económicas”. Asimismo, implementar un ordenamiento territorial y forestal a nivel nacional que incluya los usos y costumbres de los pueblos nativos y priorice el mantenimiento de la cobertura forestal, los suelos y recursos hídricos antes que autorizar las actividades extractivas de alto impacto.

Las recomendaciones también plantean realizar consultas previas a los indígenas sobre cualquier actividad que se desarrolle en sus territorios y finalizar el proceso de titulación de las tierras de las comunidades nativas. Recogen, asimismo, el pedido de derogatoria de ocho decretos legislativos y la Ley de Recursos Hídricos presentado por las organizaciones indígenas.

Perú ha concesionado 75% de su selva amazónica, que abarca dos tercios de su territorio, a empresas gasíferas y petroleras, la mayoría extranjeras.

En declaraciones a la prensa, Saúl Puerta, secretario nacional de AIDSESP, manifestó que su rechazo se debe a que el Ejecutivo decidió aprobar la labor de todas las mesas de trabajo sin discusión alguna.

“Fuimos a las mesas de diálogo con toda la intención de llegar a una solución con el gobierno”, dijo Puerta. “Quisimos hacer un negociación con el gobierno para llegar a una verdadera reconciliación, pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Hemos planteado nuestras propuestas y ninguna ha sido aceptada por el Ejecutivo”.

“Nosotros creemos que esta situación ya estaba definida”, afirmó.

Los dirigentes de AIDSESP y CONAP criticaron duramente la actitud del ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, presidente del Grupo de Coordinación, de dar por concluido el debate sin tomar en cuenta las observaciones y pedidos de los indígenas que incluían la ampliación del diálogo, la derogatoria de los decretos legislativos, la indemnización a los familiares de los nativos muertos en los enfrentamientos en Bagua, la conformación de una comisión investigadora independiente, así como el retorno del líder nativo Alberto Pizango, quien se encuentra asilado en Nicaragua desde junio pasado.

Daysi Zapata, presidenta encargada de AIDSESP, indicó que por decisión de sus apus (líderes tradicionales), los representantes indígenas en las mesas de diálogo no podían aprobar el contenido de los informes sin antes darlos a conocer a sus bases.

“Nosotros tenemos voluntad de diálogo, pero si el gobierno quiere cerrarse, tenemos una posición bien clara y definida, porque nuestras bases están esperando en la Amazonia”, manifestó Zapata. —*Noticias Aliadas*.

Notables logros en equidad de género

Presidenta Bachelet termina su mandato con gran popularidad y grandes avances para las mujeres.

La presencia de Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda “visibilizó más a la mujer”, y la hizo muy presente en la escena política y social, señala María Pía Aqueveque, joven economista y catedrática cercana a la Concertación Democrática, el frente gobernante chileno ahora de salida.

“Desde el lenguaje, casi todo cambió”, comenta Aqueveque con notable entusiasmo e ilusión.

No parece exagerar. El 19 de enero, apenas un día después de la segunda vuelta electoral en que el empresario Sebastián Piñera, de la derecha Coalición por el Cambio, venció al ex presidente Eduardo Frei (1994-2000), de la Concertación, la mandataria promulgó la Ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.

Esta ley permite, entre otras cosas, la distribución gratuita de la “píldora del día después”, el anticonceptivo de emergencia cuya entrega en centros de salud públicos había sido prohibida en abril del 2008 por la Corte Suprema.

“Estamos corrigiendo una tremenda injusticia, estamos consagrando derechos en materia de fertilidad”, dijo Bachelet, al anunciar la reforma de la ley.

La revolución de Bachelet

La conquista, sin embargo, es sólo la punta del iceberg de una serie de políticas, algunas pendientes, que se plantearon desde que comenzó el primer gobierno de la Concertación, en 1990, pero que se afianzaron de manera evidente cuando la hoy mandataria saliente asumió el poder el 11 de marzo del 2006. Una pequeña revolución comenzó entonces.

“Yo te podría hablar de muchas medidas — dice a *Noticias Aliadas* Laura Albornoz, ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)—, pero lo esencial es que la presidenta creó otra atmósfera, demostró que la mujer podía desempeñar, con eficiencia, el más alto cargo nacional”. Su sola presencia en el poder, en suma, constituyó un gran cambio.

Si bien el SERNAM fue creado en enero

“Lo esencial es que la presidenta creó otra atmósfera, demostró que la mujer podía desempeñar, con eficiencia, el más alto cargo nacional”.

— Laura Albornoz

de 1991, fue Bachelet la que, primero en el verbo, pisó a fondo en el tema de la equidad. El 21 de mayo del 2006, por ejemplo, a pocos meses de haber asumido el cargo, dijo: “Sin la presencia de la mujer no podremos derrotar la pobreza ni ser un país más competitivo”.

En el terreno de los hechos puso en marcha varias medidas que estaban en el tintero. La primera de ellas: el gabinete con paridad de género, en el que 50% de los titulares eran mujeres.

Bachelet impulsó la medida también en intendencias y gobernaciones, con lo que, efectivamente, creó otra atmósfera para las mujeres. Junto a ello, se impulsaron y aprobaron otras normas, como el otorgamiento de un bono de 300,000 pesos (US\$600 dólares) a las mujeres chilenas por cada hijo e hija, el cual es depositado en la cuenta de jubilación cuando la madre cumple 65 años de edad.

Con la reforma de la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar, por otra parte, se aumentó la protección a las víctimas de la violencia doméstica y dio “carácter de delito” a estas prácticas, algo que antes no era muy claro en la legislación. En el mismo período de la actual mandataria, se crearon al menos 31 Centros de la Mujer y 16 Casas de Acogida, como parte del Programa de Prevención de este tipo de violencia.

Por no poca añadidura, existe ya en Chile, desde el 2005 (gobierno de Ricardo Lagos), el post-natal masculino de cinco días y de cuatro días a los padres adoptivos, independientemente de la edad del adoptado. Un proyecto impulsado por Bachelet daría un postnatal de un año en el caso de que el niño tenga discapacidad.

En el campo de las remuneraciones, entró en vigencia el 19 de junio del 2009 la Ley de Igualdad Salarial (N° 20.348), que exige al empleador cumplir con el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo servicio.

La norma, fuertemente apoyada por la presidenta, procuraría acabar con la enorme brecha salarial entre hombres y mujeres que existe en Chile. Según datos de la Dirección del Trabajo para el 2006, entre las personas sin educación formal, las mujeres reciben el 76.6% de los salarios de los hombres. Entre las mujeres que han completado la educación básica y media no hay mucha diferencia, ambos grupos perciben alrededor del 70% de los ingresos de los hombres. Sin embargo, aquellas que han terminado la educación superior ganan sólo el 61.4% de los salarios que reciben los varones.

Con todo esto, “las mujeres han alcanzado

“Las mujeres han alcanzado mayor voz”.

— Camila Benado

mayor voz”, dice Camila Benado, concejal de Huechuraba, comuna popular santiaguina e integrante del Partido Socialista. Al igual que Aqueveque y Alborno, piensa que Bachelet tomó estas importantes decisiones y a la vez hizo que la cuestión de la equidad de género se volviera parte del paisaje social y cultural.

“Sin dejar de ser mujer ejerció la autoridad eficazmente”, anota Aqueveque, dando a entender que, no obstante haber tenido momentos difíciles, la presidenta supo cumplir su rol de estadista. Para ella, más allá de los problemas, se trató de un tiempo de transformación.

El cambio de Piñera

¿Cambiará esto con la llegada de Sebastián Piñera al poder? Las entrevistadas son decoro-

sas en hablar ya casi desde la oposición, pero en sus rostros entusiastas se percibe cierta serena preocupación. Cecilia Morel, la esposa del presidente electo, es una persona respetabilísima, dice una de ellas, pero no se sabe lo que pasará.

De hecho, una de las cosas que sigue estando fuera de la discusión en Chile es el tema del aborto. No está permitido, en ningún caso, ni siquiera ante el riesgo terapéutico. Dicha política fue establecida por el dictador Augusto Pinochet (1973-90) y todos los intentos por modificarla han naufragado por acción de sus partidarios aún vigentes.

Algunos de ellos están ahora en la Coalición por el Cambio, que llevó a Piñera al poder, sobre todo los afiliados a la Unión Demócrata Independiente (UDI). En los pliegues del frente de derecha que ahora gobernará Chile, además, moran importantes militantes de grupos católicos ultraconservadores, como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo.

Así las cosas, las esperanzas de Aqueveque, Alborno y Benado, y de millones de mujeres chilenas, podrían dejar de crecer si es que la consigna “Súmate al cambio” del magnate triunfador le baja las revoluciones a las políticas de género. □

ECUADOR

Sarayaku logra salida de petroleras

Gobierno y empresas finalizan relación contractual por mutuo acuerdo.

La lucha de 14 años de la comunidad kichwa de Sarayaku por la salida de dos empresas petroleras de su territorio en la oriental provincia de Pastaza, rindió sus frutos con el acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y las empresas Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina, subsidiaria de la estadounidense Chevron, y Burlington Resources, de EEUU, de poner fin de manera amigable a sus contratos.

Según información periodística, en diciembre tanto CGC como Burlington solicitaron a la petrolera estatal Petroecuador la finalización de sus contratos por mutuo acuerdo debido a que no pudieron desarrollar sus operaciones por la oposición de las comunidades indígenas.

En 1996, el Estado ecuatoriano, sin consultar a Sarayaku, otorgó en concesión a CGC y Burlington dos bloques contiguos de exploración y explotación petrolera en el territorio indígena, incumpliendo el “Acuerdo de Sara-

yaku”, firmado siete años antes, por el cual el Estado le garantizaba su derecho al territorio y la protección de la explotación petrolera.

A principios del 2003, ante la resistencia de Sarayaku a la actividad petrolera, las autoridades determinaron la militarización y prohibición del libre tránsito de los indígenas en su propio territorio, a lo que se sumó la campaña de amedrentamiento contra la población por parte de las petroleras.

Esta situación obligó a Sarayaku a presentar en el 2004 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado ecuatoriano y solicitar medidas cautelares a favor de la comunidad. Las petroleras se vieron obligadas a suspender sus actividades al año siguiente luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una resolución a favor de Sarayaku ordenando a las autoridades gubernamentales tomar medidas provisionales para la protección de los indígenas.

Aunque la finalización de los contratos con las petroleras es un hecho, hay un punto de las medidas cautelares planteadas por la CIDH que el Estado ecuatoriano no ha cumplido: el retiro de 400 kg de explosivos colocados por CGC dentro del territorio indígena.

El 3 de febrero, Sarayaku recurrió nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir protección por la existencia de los explosivos en su zona. Según el presidente de Sarayaku, Holger Cisneros, “pese al tiempo transcurrido, el Estado ecuatoriano sólo ha retirado 14 kg de explosivos”. —*Noticias Aliadas*.

Indebida objeción de conciencia

Despenalización del aborto en sus tres casos específicos enfrenta obstáculos para su implementación.

Casi cuatro años después de que la Corte Constitucional de Colombia despenalizara el aborto en tres casos, aún no se ha implementado la sentencia y se presentan obstáculos que no permiten aplicar la obligación legal.

En mayo del 2006, el tribunal levantó la prohibición del aborto cuando el embarazo pone en riesgo la salud tanto física como mental de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, o cuando el feto trae malformaciones que son incompatibles con la vida,

“El mayor obstáculo que enfrenta la sentencia C- 355/06 es la objeción de conciencia que se está utilizando en forma indebida”, asegura a *Noticias Aliadas* la abogada Ariadna Tovar, de Women’s Link Worldwide, organización que promueve la equidad de género desde el Derecho.

La primera traba “fue lo que la Corte Constitucional llamó objeción de conciencia institucional”, precisa la abogada. “Los médicos no se declaraban objetores de conciencia por sus propias convicciones sino que lo hacían colectivamente o las [privadas, de carácter administrativo] Empresas Prestadoras de Salud (EPS) permitían que eso se diera”.

Añade que la objeción de conciencia también estaba siendo utilizada por los jueces. “Nosotros [en Colombia] tenemos un marco constitucional que permite a las mujeres acudir a la figura de ‘acción de tutela’ que invoca los derechos fundamentales. El juez debe verificar los requisitos que dio la Corte Constitucional —si es violación o incesto: la denuncia penal, y en caso de violación o malformación un certificado médico—, pero hay jueces que no reciben el caso aduciendo objeción de conciencia y trasladan el caso a otro juez, dilatando la práctica o fallando en objeción de conciencia, negando así el procedimiento de IVE [interrupción voluntaria del embarazo] en base a su convicción personal o religiosa contraviene su razón legal”.

Decreto suspendido

En vista de estos inconvenientes, el gobierno emitió el decreto 4444 en diciembre del 2006 que establecía las normas a cumplir de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional en los tres casos.

“Lastimosamente el Consejo de Estado suspendió y mantiene hasta hoy suspendido el decreto aduciendo que es el Congreso y no

el gobierno el que debe regular el tema del aborto y la atención en salud de las mujeres”, dijo a *Noticias Aliadas* un vocero del Ministerio de Protección Social que no quiso identificarse por no estar autorizado a declarar oficialmente.

Esta medida retrasó aún más la implementación de la sentencia C- 355/06, ya que creó un vacío jurídico y una gran confusión “al punto de que se pensaba que se había acabado con el beneficio” comenta Tovar.

Ante esta situación, la Corte Constitucional reiteró jurisprudencia en octubre del año pasado mediante la sentencia T-388 pronunciándose en contra de la objeción de conciencia judicial, aclarando que ningún juez puede escudarse en la objeción de conciencia para negarse a tramitar o a decidir sobre un caso de aborto.

Además, se ratifica en la prohibición a las EPS o a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) —clínicas u hospitales a donde las EPS remiten a los y las pacientes— de acudir a la objeción de conciencia institucional. La Corte aclara que a la objeción de conciencia puede acudir el personal que realiza directamente la intervención médica, quienes deben expresar por escrito las razones por las cuales se niegan a la realización del procedimiento de IVE.

Asimismo, la Corte reiteró que los servicios de IVE deben estar disponibles en todo el territorio nacional e hizo un llamado a los ministerios de Educación y de Protección Social para que pongan en marcha un plan de promoción de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que incluya información acerca de las causales bajo las cuales está despenalizado el aborto en Colombia.

La orden de la Corte de exigir un plan pedagógico del tema fue pedida inmediatamente en nulidad por el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, opositor declarado del aborto por sus convicciones religiosas, argumentando que el organismo competente para limitar la objeción de conciencia era el Legislativo.

Las dificultades de implementación de la sentencia también se agravan por la fuerte campaña en contra de grupos conservadores, liderados por la Iglesia Católica, que confunden las campañas de información con campañas masivas para promover el aborto.

La falta de información de las propias mujeres sobre el procedimiento del IVE en los tres casos específicos, determina que se les sigan vulnerando sus derechos fundamentales, como son la vida y la salud.

Obstáculos

Otra dificultad que ha sido identificada, pero es difícil de superar son las certificaciones que en algunos casos piden las EPS y las IPS.

“Hay jueces que no reciben el caso aduciendo objeción de conciencia y trasladan el caso a otro juez, dilatando la práctica”.

— Ariadna Tovar

“La implementación es paulatina porque genera cambios culturales y se están destruyendo mitos”. — Ariadna Tovar

“Exigen otras evidencias, juntas médicas, auditorías, otros exámenes, cuando lo único que se necesita es un certificado médico, para luego remitir a la paciente a otro centro de salud, generando dilataciones en el proceso y avance del embarazo”, asegura Tovar.

Ante esta circunstancia, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Juan Manuel Díaz, manifestó que “las EPS seguirán cumpliendo con la orden de la Corte Constitucional, que permite la práctica del aborto en casos especiales”, a la vez que recomendó que “la deci-

sión se tome en el menor tiempo posible dado que después de las 16 semanas aumenta el riesgo para la mujer”.

Según cifras oficiales, 30,000 mujeres mueren cada año en Colombia por abortos clandestinos. El Ministerio de Protección Social registra que, en los últimos tres años, desde la sentencia de la Corte al 2009, 342 mujeres han interrumpido sus embarazos legalmente.

“La implementación es paulatina porque genera cambios culturales y se están destruyendo mitos; pero existe un sector que aún está reticente a aceptar los derechos sexuales y reproductivos en general. Nosotros estamos identificando obstáculos, determinando fuentes de donde provienen y viendo cómo los podemos remover”, señala la abogada.

Mencionó que un avance significativo lo determinó la multa de 370 salarios mínimos (unos US\$92,000) que la Superintendencia Nacional de Salud impuso en noviembre a la EPS Coomeva por negarse a practicar una interrupción voluntaria del embarazo a una niña de 13 años que había sido violada. □

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

Mujeres siguen enfrentando elevado riesgo de contraer VIH/sida

Violencia, dependencia económica y programas educativos deficientes amenazan salud de mujeres.

La lucha contra el VIH/sida ha tomado un inquietante giro para las mujeres, quienes han tenido poco que celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el VIH/sida es la primera causa de muerte en el mundo para mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) lanzó el 2 de marzo el Programa para Acelerar la Acción Nacional sobre Mujeres, Niñas, Igualdad de Género y VIH (2010-2014), un ambicioso plan de acción para combatir las inequidades que puedan causar la propagación del virus y hacer frente a deficientes servicios de educación y salud para las mujeres.

La violencia física y sexual, la falta de educación y el poder económico socavan los esfuerzos de las

mujeres por tener un mejor control sobre su sexualidad y en la toma de decisiones seguras, como el uso de anticonceptivos.

“Treinta años después de la adopción de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, muchas mujeres y niñas todavía no tienen iguales oportunidades para hacer realidad los derechos reconocidos por la ley”, dijo la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. “La exclusión social, los crímenes de ‘honor’, la mutilación genital femenina, el tráfico de mujeres, la restricción de la movilidad y los matrimonios tempranos, entre otros, niegan el derecho a la salud a mujeres y niñas e incrementan el riesgo de enfermedades y la muerte”.

El número de mujeres infectadas por VIH se ha incrementado en América Latina y el Caribe, especialmente por el cada vez más temprano inicio de

la actividad sexual. Los oradores durante el VI Congreso Centroamericano sobre VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, llevado a cabo en San José, Costa Rica, del 1 al 5 de marzo, señalaron que las mujeres y jóvenes de la región enfrentan el mayor riesgo de contraer el virus.

En el 2008 en América Latina se produjeron 170,000 nuevos contagios de VIH, según ONUSIDA. Aunque el Caribe sólo tiene 0.7% de personas con VIH, ha sido la región más duramente afectada por el VIH fuera de África subsahariana, precisó la organización.

Luego del terremoto que devastó Haití en enero, ONUSIDA invocó a enviar más ayuda internacional para combatir la propagación de la enfermedad.

“Este enorme desastre natural en un país con tal predominio de sida no tiene precedentes”, dijo Michel Sidibé, director de ONUSIDA.

ONUSIDA estima que había 120,000 personas con VIH en Haití antes que ocurriera el terremoto, y más de la mitad de ellas mujeres.

“Más de un millón de personas viven ahora en refugios temporales, poniéndolas en un mayor riesgo de violencia incluyendo la sexual y la violencia de género”, dijo Sidibé.

“Se necesitan urgentemente programas para reducir la vulnerabilidad al VIH y asegurar la protección”.

—Noticias Aliadas.

“Ser de izquierda no te quita necesariamente lo machista”

Dunia Mokrani Chávez es analista política, integrante del Grupo Comuna, conformado por intelectuales que apoyan críticamente al gobierno, investigadora del Centro de Estudios Andinos Amazónicos y Mesoamericanos (CEAM), y coordinadora del Comité de Seguimiento a Conflictos del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO). Es una de las fundadoras del colectivo de mujeres Samka Sawuri (Tejedoras de Sueños), promotora de variadas acciones relativas a la visibilización de la mujer y debates de género. Con este y otros grupos Mokrani ha compartido distintas etapas del proceso de cambio político boliviano, incluyendo la elaboración de la nueva Constitución.

Juan Nicastro, colaborador de NOTICIAS ALIADAS, conversó con Mokrani sobre la opresión impuesta por el patriarcado que está profundamente enraizado en la sociedad boliviana.

¿Por qué son necesarias las organizaciones de mujeres en Bolivia?

Porque hay una forma de dominación que es específica, que es la que viene del dominio patriarcal. Esa es la discusión actual, y lo bueno es que no es una discusión reducida a algunos círculos de mujeres feministas, sino que se está generalizando. Si las mujeres no nos organizamos para hacer frente a este tipo de opresión, ésta no se va a resolver. Que se resuelvan las otras opresiones no va a resolver por añadidura la de origen patriarcal.

Por eso es importante el tema incluso dentro de las propias organizaciones específicas, como es el caso de las Bartolinas [Federación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa] donde hay toda una historia de por qué ellas decidieron visibilizarse también como mujeres campesinas, no sólo dentro de la CSUTCB [Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia]. Pero también hay un cuestionamiento a esto; desde muchas organizaciones populares y laborales algunas mujeres sienten que el discurso feminista genera división, y que ante todo está su condición de clase y su condición étnica. Todo esto se resuelve en la práctica, cuando las mismas compañeras dicen nuestra lucha no es contra los hombres, sino por que se escuche nuestra voz.

¿Cuáles son los peores ejemplos del dominio patriarcal?

La violencia es quizá la forma más clara. Desde la violencia cotidiana hasta la política, económica, sexual y social. Por ejemplo, hay muchos casos de mujeres concejalas que han sido obligadas a renunciar para que asuma el suplente varón, incluso con casos de violencia

física cuando alguna se resistía a renunciar. Esto porque había una ley de cuotas que obligaba a los partidos a llevar su porcentaje de mujeres; entonces muchas veces esas mujeres han entrado a la vida pública partidaria muy a pesar de esas estructuras patriarcales, que las ponían como titulares para después sacarlas. O por ejemplo una compañera nos contaba que ser diputada ha significado su divorcio, cuando un diputado hombre nunca va a tener problemas por no estar en su casa, pero la mujer sí. Esas son cosas que no están resueltas.

Otro tema es la invisibilización laboral, por ejemplo, el trabajo a domicilio [trabajo productivo realizado en el hogar por encargo o para la venta a cuenta propia]: una de las razones por las que ese trabajo no es considerado como tal es porque está en el ámbito doméstico. Eso es invisibilización del trabajo de las mujeres.

Otras pruebas a la vista de la existencia del patriarcado son los espacios de mujeres dominados por hombres. De los trabajadores del comercio, 99% son mujeres pero tienen a la cabeza dos hombres. En el caso de las enfermeras, son en su mayoría mujeres pero quien lleva la batuta es un hombre.

¿Y por qué? Ellas mismas lo dicen: los hombres manejan bien ciertos miedos. Y hay muchos casos de dirigentas que han sido mal miradas por los mismos vecinos a quienes ellas representaban, por ser mujeres. Es que algunas charlas, debates, reuniones, son en bares. Representantes de sindicatos y federaciones se reúnen en bares, y si una mujer entra en un bar a discutir, ya es mal mirada. Entonces para que no la miren mal, o por los hijos o por el esposo, prefiere dejar el cargo.

¿Hay discriminación contra las mujeres?

Las mujeres que han sido golpeadas o asesinadas en octubre en El Alto [guerra del gas, 2003] o las que eran golpeadas en Santa Cruz [simpatizantes del partido de gobierno perseguidos y golpeados por grupos cercanos al gobierno cruceño, agosto 2008], o las que eran golpeadas en Sucre [humillación de campesinos e indígenas en manos de la derecha, mayo 2008], o las que han matado en Pando [masacre de Pando, disparos de paramilitares contra marcha campesino-indígena en octubre 2008], eran mujeres indígenas campesinas, y para muchos agresores esas vidas valen menos que la de una mujer profesional o de la ciudad o que de un hombre. Ha habido un ensañamiento especial contra las mujeres en medio de un rebrote de racismo. Allí se veía el machismo y el fascismo juntos.

Las mujeres han participado ac-



“Hay muchos casos de mujeres concejalas que han sido obligadas a renunciar para que asuma el suplente varón”.

— Dunia Mokrani Chávez

tivamente en espacios asamblearios o de movilización social, pero luego eso no se traduce proporcionalmente en escaños, en espacios institucionalizados de toma de decisiones. Y sobre esto hay “curiosas teorías”; un diputado hablaba sobre una supuesta superioridad de los hombres, y “su evidencia empírica” era lo que mencionábamos antes, que los gremiales son en su mayoría mujeres pero han necesitado un líder varón. Les dicen a sus compañeras que las mujeres no tienen capacidad. Y nosotros les decimos que esto es lo que las clases dominantes siempre les han dicho a los indígenas a lo largo de la historia, y ahora se reproduce de los varones a sus propias compañeras de lucha.

¿Qué están haciendo para cambiar ese estado de cosas?

Dentro del colectivo también estamos reflexionando sobre cómo articular estas luchas, la descolonización y despatriarcalización. Creemos que para descolonizar también hay que despatriarcalizar. Que mucho de este Estado colonial tiene su carga señorial patriarcal. Desde el Estado esta cuestión sigue subordinada, no tiene la suficiente atención. Se corre el riesgo de que al creer que las otras luchas van a asumir las luchas de las mujeres, esto quede subsumido. Y las condiciones ahora no son fáciles para trabajar el tema de género, el ser de izquierda no te quita necesariamente lo machista, y con eso es medio difícil ahora luchar.

Vemos que hay algo que no se ha discutido lo suficiente: la estructura liberal en el tema social había generado toda una serie de compartimentos, ministerios de asuntos indígenas, de asuntos de género, de asuntos generacionales, etc. Entonces, está claro que un gobierno como éste no va a tener un ministerio de asuntos indígenas, y es lo primero que dijo el presidente Evo Morales, “los indígenas no somos ya un asunto” y estamos en todo, pero un poco han trasladado ese razonamiento al tema de las mujeres, y simplemente lo resuelven diciendo que las mujeres también estamos en todo, cosa que no es real. Desde un punto de vista, ahora la institucionalidad liberal que nosotras hemos criticado, pasa a ser hasta una necesidad frente a una simple negación del tema; que se enuncie que las mujeres estamos en todas partes no nos da acceso a todos los espacios.

Entonces no está claro cómo este proceso de cambio asume las luchas de las mujeres. Incluso nosotras hemos escuchado a

diputados del [partido de gobierno, Movimiento al Socialismo] MAS decirles a sus compañeras diputadas que las mujeres no tienen capacidad para asumir la representación. Entonces ahí hay algo que todavía no está claro, que es cómo este proceso va a asumir esas luchas, que no subordine estas luchas. Hace falta una postura militante más clara para enfrentar estos tipos de opresión.

¿Cuál es su visión sobre el momento actual del proceso de cambio?

Este proceso de cambio ha sido producto de una alianza de organizaciones, y ahora lamentablemente se ha convertido en “el poder”, en una disputa sobre de quién es el proceso de cambio, si del MAS o de las organizaciones que se han quedado al margen lamentablemente, porque casi todas han sido subsumidas por el MAS, y se nos está queriendo arrebatar un proceso de cambio que ha sido generado por todos o por lo menos los que hemos querido ese cambio, y que no debería estar atrapado en un Estado, en un partido; creo que hay pequeños avances pero también grandes retrocesos por estas cosas.

A veces no sabemos cómo hacer, porque nosotras también queremos generar cambios, y las mujeres necesitamos que esos cambios sean más rápidos. De todas maneras, a pesar de dar sólo pequeños pasos, nos mantenemos unidas para seguir soñando. Nos han cuestionado el nombre de “Tejedoras de Sueños”, creo que las condiciones ahorita no están dadas y por eso creo que todavía estamos soñando.

Hay un cambio, de nada a algo, y está sobre todo la esperanza porque ha llegado un indígena a ocupar la presidencia; como dicen muchas de las mujeres ancianas en el campo, uno de sus hijos ahora está manejando el Estado. Pero este cambio ha sido producido por otras formas de hacer política, y en este momento hay un Estado colonial con todas sus viejas formas, incluyendo todas sus luchas y avances —porque no es el mismo Estado de hace 200 años—, pero que ha estado ocupado siempre por las clases dominantes, y ahora ese Estado está ocupado por otros actores, y no necesariamente para cambiarse a sí mismo. Tú ves entonces a algunas compañeras, por un lado empoderadas bien, pero por otro lado empoderadas contra sus propias compañeras, remedando caudillismos, porque somos una sociedad de caudillos también. □

Noticias Aliadas ofrece información y análisis sobre el acontecer de América Latina y el Caribe con énfasis en los temas que afectan a las poblaciones excluidas de la región. Versión en inglés: **Latinamerica Press**.

Producido por **COMUNICACIONES ALIADAS**, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que por más de 40 años produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos de las poblaciones excluidas y menos favorecidas de América Latina y el Caribe.

Directora: Elsa Chanduvi Jaña
(echanduvi@comunicacionesaliadas.org)

Editoras: Cecilia Remón Amaiz, Leslie Josephs

Editor gráfico: William Chico Colugna

Comunicaciones Aliadas
Jirón Olavegoya 1868, Lima 11, Perú
(511) 265 9014 Fax: (511) 265 9186

info@comunicacionesaliadas.org
www.noticiasaliadas.org
www.latinamericapress.org (en inglés)

Además de nuestra edición en línea, ofrecemos otros recursos electrónicos y en línea, así como informes especiales y servicios informativos gratuitos por e-mail.

Para información de servicios y productos, contactarse con Patricia Díaz, responsable de Mercadeo, a pdiaz@comunicacionesaliadas.org

n **noticias aliadas**

APARTADO 18-0964, LIMA 18, PERÚ

Noticias Aliadas es una asociación sin fines de lucro, con Registro Civil N° 646, Asiento A-1 (Art. 33°, D.L. 20680). Hecho el depósito legal N° 99-4052.

Printed Matter
IMPRESOS